



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**55ª REUNIÓN – 22ª SESIÓN ORDINARIA**  
**4 DE OCTUBRE DE 2000**

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor JOSÉ GENOUD,  
y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor LUIS A. LEÓN

Secretarios:

Señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor RICARDO MITRE y señor JUAN C. OYARZÚN

Prosecretarios:

Señor ALEJANDRO L. COLOMBO, doctor MIGUEL A. FERNÁNDEZ ALÍAS,  
doctor VÍCTOR R. VANNINI y señor RODOLFO BERNARDINI





## PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.  
 ALASINO, Augusto  
 ALTUNA, Juan C.  
 ANGELOZ, Eduardo C.  
 ARNOLD, Eduardo A.  
 BAUM, Daniel  
 BAUZÁ, Eduardo  
 BRANDA, Ricardo A.  
 BRAVO, Leopoldo  
 CABANA, Fernando V.  
 CAFIERO, Antonio F.  
 CARBONELL, José Fernando F.  
 CORACHI, Carlos Vladimiro  
 COSTANZO, Remo J.  
 DEL PIERO, Pedro  
 GAGLIARDI, Edgardo  
 GARCÍA ARECHA, José M.  
 GENOUD, José  
 GIOJA, José L.  
 HUMADA, Julio C.  
 LEÓN, Luis A.  
 LÓPEZ, Alcides H.  
 LOSADA, Mario A.  
 LOZA, Juan Carlos  
 MAGLIETTI, Alberto R.  
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.  
 MASSACCESI, Horacio  
 MAYA, Héctor M.  
 MENEGHINI, Javier R.  
 MENEM, Eduardo  
 MIKKELSEN-LÖTH, Jorge F.  
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.  
 MOREAU, Leopoldo R. G.  
 ORTEGA, Ramón B.  
 OUDIN, Ernesto  
 PALACIOS, Gerardo L.

PARDO, Ángel F.  
 PRETO, Ruggero  
 PRUYAS, Tomás R.  
 RAJER, Beatriz I.  
 RODRÍGUEZ SAA, Alberto  
 ROMERO, Marcelo J.  
 ROMERO FERIS, José A.  
 ROSTAN, Néstor D.  
 SÁEZ, José María  
 SAGER, Hugo Abel  
 SALA, Osvaldo R.  
 SALUM, Humberto E.  
 SAN MILLÁN, Julio A.  
 SAPAG, Silvia E.  
 SERGNESE, Carlos J. A.  
 TELL, Alberto Máximo  
 ULLOA, Roberto Augusto  
 USANDIZAGA, Horacio Daniel  
 VAQUIR, Omar M.  
 VARIZAT, Daniel A.  
 VERNÁ, Carlos Alberto  
 VILLARROEL, Pedro G.  
 VILLAVERDE, Jorge A.  
 YOMA, Jorge R.  
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

## AUSENTES, CON AVISO:

DE LA ROSA, Carlos L.  
 DI PIETRO, Arturo R.  
 GALVÁN, Raúl A.  
 MASSAT, Jorge  
 MELGAREJO, Juan Ignacio  
 RODRÍGUEZ, Manuel A.  
 SAPAG, Felipe R.

## LICENCIA:

CANTARERO, Emilio Marcelo

## SUMARIO

Manifestaciones en minoría. (Pág. 5947.)

Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 5947.)

## Asuntos entrados:

- I. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen legal aplicable a menores infractores a la ley penal (P. E.-320/00). (Pág. 5948.)
- II. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 5956.)
- III. Comunicaciones de comisiones. (Pág. 5957.)
- IV. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 5957.)

- V. Comunicaciones oficiales. (Pág. 5957.)
- VI. Dictámenes de comisiones. (Pág. 5958.)
- VII. Peticiones particulares. (Pág. 5961.)
- VIII. Proyecto de resolución del señor senador Del Piero sobre ratificación del procedimiento para la difusión de las declaraciones juradas patrimoniales de los señores senadores (S.-2.119/00). (Pág. 5961.)
- IX. Proyecto de resolución del mismo señor senador sobre reglamentación del régimen de declaraciones patrimoniales de los señores senadores y del personal jerárquico (S.-2.120/00). (Pág. 5962.)
- X. Proyecto de ley del señor senador Massaccesi sobre percepción de reembolsos y reintegros por la exportación de productos frutihortícolas (S.-2.121/00). (Pág. 5964.)

**XLVIII. Proyecto de ley de la señora senadora Raijer sobre modificación de la Ley Nacional de Tránsito en lo referente a la creación del Fondo Federal para la Prevención de Accidentes de Tránsito (S.-2.167/00). (Pág. 6001.)**

**XLIX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se declaran de interés parlamentario las III Jornadas sobre Maltrato Infanto-Juvenil: Hijos y Padres, en Bariloche, Río Negro (S.-2.168/00). (Pág. 6003.)**

**L. Proyecto de declaración del señor senador Branda por el que se manifiesta pesar por la desaparición de integrantes de la Gendarmería Nacional en el accidente ocurrido en el río Santa Cruz (S.-2.169/00). (Página 6004.)**

**4. Plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 6004.)**

**5. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre protección de los datos personales (S.-577, 606, 684, 1.094, 1.537, 1.582, 1.042/98, C.D.-97/00). Se aprueba. (Pág. 6010.)**

**6. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de los señores senadores Yoma y Romero referido a la Ley de Protección de Datos Personales (S.-2.188/00). Se aprueba. (Página 6054.)**

**7. Consideración del proyecto de declaración unificado de los señores senadores Branda, Rostan y Romero por el que se expresa pesar y se rinde homenaje a los gendarmes desaparecidos en el sur argentino (S.-2.169, 2.150 y 2.131/00). Se aprueba. (Pág. 6055.)**

**8. Consideración del proyecto de declaración unificado de los señores senadores Villaverde y Rodríguez sobre homenaje a los caídos durante el intento de copamiento del Regimiento N° 29 de Monte en Formosa (S.-2.170 y 2.147/00). Se aprueba. (Pág. 6056.)**

**9. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de los señores senadores Arnold y Preto por el que se ratifica la plena vigencia de la ley 24.181, sobre eliminación del impuesto a los combustibles líquidos en la Patagonia (S.-2.016/00). Se aprueba. (Pág. 6057.)**

**10. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de los señores senadores Ulloa y Arnold por el que se solicita la derogación del decreto 66/75, sobre prohibición del uso de gas como combustible (S.-2.148/00). Se aprueba. (Pág. 6058.)**

**11. Manifestaciones de varios señores senadores. (Pág. 6059.)**

**12. Apéndice:**

**I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 6061.)**

**II. Inserción. (Pág. 6061.)**

—En Buenos Aires, a las 18 y 26 del miércoles 4 de octubre de 2000:

## 1

### MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Sergnese.** — Señor presidente: ruego que convoque a los señores senadores llamando durante diez minutos más, y si no hay quórum que se levante la sesión. Ya llevamos dos horas esperando.

**Sr. Presidente (León).** — La Presidencia solicita a los presidentes de bloque que convoquen a los señores senadores a efectos de conseguir quórum.

**Sr. Sergnese.** — Por diez minutos, señor presidente.

**Sr. Presidente (León).** — Sí, señor senador.

—Así se hace.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Genoud.

—A las 18 y 29:

**Sr. Presidente (Genoud).** — Queda abierta la sesión.

## 2

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Genoud).** — Invito al señor senador por la provincia de Río Negro doctor Horacio Massaccesi a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

Invito a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Massaccesi procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)



## 5

## PROTECCION DE DATOS PERSONALES

**Sr. Presidente (Genoud).** – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre protección de los datos personales.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Pontaquarto), – (Lee):**

## Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley de protección de datos personales que le fuera enviado en segunda revisión; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan:

1. Insistir en la redacción original del proyecto del Honorable Senado.

2. Aceptar la primer modificación efectuada al artículo 26 apartado 4º introducida por la Honorable Cámara de Diputados, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho".

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 27 de septiembre de 2000.

Jorge Yoma. – Alberto M. Tell. – Luis Molinari Romero. – Eduardo Menem. – Horacio A. Zalazar. – Beatriz J. Rajer. – Ricardo N. Branda. – Héctor M. Maya. – Daniel Baum. – Osgaldo R. Sala. – Omar M. Vaquir. – José L. Gioja. – José C. Humada. – Carlos V. Corach. – Antonio Caffero. – Emilio M. Cantarero. – Ernesto R. Oudin. – Jorge F. Mikkelsen-Löth. – Augusto Alasino. – Hugo A. Sager. – Julio A. San Millán.

En disidencia parcial:

Carlos A. Sergnese. – Carlos Villarroel. – Jorge A. Villaverde. – Raúl A. Galván. – Alberto R. Maglietti. – Mario A. Losada.

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

## LEY DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES

## CAPÍTULO I

*Disposiciones generales*

**Artículo 1º – Objeto.** La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

**Art. 2º – Definiciones.** A los fines de la presente ley se entiende por:

- *Datos personales:* información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- *Datos sensibles:* datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
- *Archivo, registro, base o banco de datos:* indistintamente designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- *Tratamiento de datos:* operaciones y procedimiento sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- *Responsable de archivo, registro, base o banco de datos:* persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.
- *Datos informatizados:* los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- *Titular de los datos:* toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.



- *Usuario de datos:* toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.
- *Disociación de datos:* todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

## CAPÍTULO II

### Principios generales relativos a la protección de datos

Art. 3º - *Archivos de datos - Licitud.* La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en consecuencia.

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

Art. 4º - *Calidad de los datos:*

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

Art. 5º - *Consentimiento:*

1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento, el que deberá constar

por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

2. No será necesario el consentimiento cuando:

- a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;
- b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado;
- c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio y número de teléfono;
- d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;
- e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la ley 21.526.

Art. 6º - *Información.* Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:

- a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios;
- b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;
- c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
- d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;
- e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.

Art. 7º - *Categoría de datos.*

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.
2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las



organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros.

4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Art. 8º - *Datos relativos a la salud.* Los hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas y los profesionales vinculados a la ciencia médica pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.

Art. 9º - *Seguridad de datos:*

1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúna condiciones técnicas de integridad y seguridad.

Art. 10. - *Deber de confidencialidad:*

1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aún después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Art. 11. - *Cesión:*

1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.
2. El consentimiento para la cesión es revo-

3. El consentimiento no es exigido cuando:

- a) Así lo disponga una ley;
- b) En los supuestos previstos en el artículo 5º inciso 2º;
- c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
- d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;
- e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.

4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Art. 12. - *Transferencia internacional:*

1. Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados.
2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:
  - a) Colaboración judicial internacional;
  - b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso e) del artículo anterior;
  - c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;
  - d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;
  - e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

### CAPÍTULO III

#### *Derechos de las titulares de datos*

Art. 13. - *Derecho de información.* Toda persona puede solicitar información al organismo de con-



tról relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

Art. 14. — *Derecho de acceso:*

1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes.
2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimará insuficiente, quedará expedida la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

Art. 15. — *Contenido de la información:*

1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen.
2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aún cuando se vinculen con el interesado.
3. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin.

Art. 16. — *Derecho de rectificación, actualización o supresión:*

1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.
2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o fal-

3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley.
4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.
5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.
7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos.

Art. 17. — *Excepciones:*

1. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.
2. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga a ejercer su derecho de defensa.

Art. 18. — *Comisiones legislativas.* Las comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del Congreso de la Nación, o las que las sustituyan, tendrán acceso a



los archivos o bancos de datos referidos en el artículo 23 inciso 2 por razones fundadas y en aquellos aspectos que constituyan materia de competencia de tales comisiones.

Art. 19. – *Gratuidad.* La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

Art. 20. – *Impugnación de valoraciones personales:*

1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.
2. Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos.

#### CAPÍTULO IV

##### *Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos*

Art. 21. – *Registro de archivos de datos. Inscripción:*

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo de control.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
  - a) Nombre y domicilio del responsable;
  - b) Características y finalidad del archivo;
  - c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
  - d) Forma de recolección y actualización de datos;
  - e) Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos;
  - f) Modo de interrelacionar la información registrada;
  - g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
  - h) Tiempo de conservación de los datos;
  - i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro.

Art. 22. – *Archivos, registros o bancos de datos públicos:*

1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial.
2. Las disposiciones respectivas, deben indicar:
  - a) Características y finalidad del archivo;
  - b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
  - c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
  - d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán;
  - e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
  - f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
  - g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.

Art. 23. – *Supuestos especiales:*

1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos personales que por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquéllos sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.
2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, en



tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.

3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

**Art. 24. – Archivos, registros o bancos de datos privados.** Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 21.

**Art. 25. – Prestación de servicios informatizados de datos personales:**

1. Cuando por cuenta de terceros se prestan servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aún para su conservación.
2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de hasta cinco años.

**Art. 26. – Prestación de servicios de información crediticia:**

1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años.

5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.

**Art. 27. – Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad:**

1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.
2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno.
3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.

**Art. 28. – Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas:**

1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.
2. Si en el proceso de recolección de datos no resultara posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna.

## CAPÍTULO V

### Control

**Art. 29. – Órgano de control:**

1. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
  - a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
  - b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo



de las actividades comprendidas por esta ley;

- c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
- d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
- e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados;
- f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
- g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley;
- h) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar informes, para obtener la correspondiente inscripción en el registro creado por esta ley.

2. El órgano de control gozará de autonomía funcional y actuará como órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.
3. El órgano de control será dirigido y administrado por un director designado por el término de cuatro (4) años, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, debiendo ser seleccionado entre personas con antecedentes en la materia.

El director tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios públicos y podrá ser removido por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones.

#### Art. 30. – Códigos de conducta:

1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elab-

orar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley.

2. Dichos códigos deberán ser inscriptos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

### CAPÍTULO VI

#### Sanciones

##### Art. 31. – Sanciones administrativas:

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.
2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.

##### Art. 32. – Sanciones penales:

1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:
  1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales.
  2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales.
  3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
  4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.



2. Incorpórase como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente:

Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que:

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
2. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años.

## CAPÍTULO VII

### *Acción de protección de los datos personales*

Art. 33. – *Procedencia.* La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá:

- a) Para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos;
- b) En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.

Art. 34. – *Legitimación activa.* La acción de protección de los datos personales o de hábeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado.

Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.

En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el Defensor del Pueblo.

Art. 35. – *Legitimación pasiva.* La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes.

Art. 36. – *Competencia.* Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

Procederá la competencia federal:

- a) Cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacio-

- b) Cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.

Art. 37. – *Procedimiento aplicable.* La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.

Art. 38. – *Requisitos de la demanda:*

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario del mismo.

En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.

2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley.
3. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
4. El juez podrá disponer el bloque provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.
5. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias, requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

Art. 39. – *Trámite:*

1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

Art. 40. – *Confidencialidad de la información:*

1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencia-



lidad de la información que se les requiere, salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodística.

2. Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la presente ley o por una ley específica deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

**Art. 41. – Contestación del informe.** Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.

**Art. 42. – Ampliación de la demanda.** Contestando el informe, el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará el traslado al demandado por el término de tres días.

**Art. 43. – Sentencia:**

1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto del artículo 42, luego de contestada la ampliación, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.
2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.
4. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control, que deberá llevar un registro al efecto.

**Art. 44. – Ambito de aplicación.** Las normas de la presente ley contenidas en los capítulos I, II, III y IV y artículo 32 son de orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional.

Se invita a las provincias a adhiere a las normas de esta ley que fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.

La jurisdicción federal regirá respecto de los registros, archivos, bases o bancos de datos interconectados en redes de alcance interjurisdiccional, na-

**Art. 45. – El Poder Ejecutivo nacional** deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

**Art. 46. – Disposiciones transitorias.** Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el registro que se habilite conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el presente régimen dentro del plazo que al efecto establezca la reglamentación.

**Art. 47. – Los bancos de datos** prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir, o en su caso, omitir asentar, todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.

**Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.**

Saludo a usted muy atentamente.

**Sr. Presidente (Genoud).** – En consideración.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: este proyecto de ley, que si Dios quiere hoy vamos a sancionar, tuvo un recorrido bastante extenso y conflictivo en este Parlamento, ya que hubo distintas alternativas parlamentarias que se dieron desde 1996 –cuando este Congreso sancionó la primera ley reglamentaria de hábeas data– hasta hoy.

En efecto, la iniciativa que había sido del Senado fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual modificó sustancialmente la propuesta de esta Cámara. Luego, el Poder Ejecutivo vetó aquella sanción del Congreso, y la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados. Pero luego caducó por cuanto no hubo insistencia por parte de las Cámaras del Congreso, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.

Posteriormente, tomando como base los fundamentos del veto del Poder Ejecutivo –referidos, precisamente, a la sanción originaria del Senado–, se volvió a dar a esta iniciativa estado parlamentario a través de un proyecto del señor senador Menem y sobre la base del trabajo que profundamente efectuó la Comisión de Asuntos Constitucionales; de haber sido receptado por la Cámara de Diputados, seguramente hoy ya estaría la ley sancionada.

Pero todo ese trabajo del señor senador Menem, de nuestra bancada, quien –reitero– presentó el proyecto de ley respectivo, si bien tuvo una rápida sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados fue modificado. En reali-



dad, dicha Cámara no modificó sustancialmente nuestra sanción. Incorporó algunas cosas y hubo algunos artículos que no habían estado incluidos en el dictamen ni en el proyecto originario del Senado pero sí en la sanción —que fueron incorporados en el recinto— que los eliminó. Por ejemplo, el nuevo artículo 47, que establece una suerte de amnistía para todos aquellos millones de argentinos que hoy están prácticamente inhabilitados para acceder al crédito y al giro comercial normal como consecuencia del abuso que las entidades de información crediticia o los bancos de datos comerciales hicieron y hacen de los datos de las personas. Por eso, ese artículo 47 señala que toda persona que al momento de sancionada la ley tenga cancelada su obligación comercial tiene derecho a ser borrada o eliminada de los llamados registros de información crediticia.

Dicho artículo ha sido apoyado, unánimemente, por todas las organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores y por las pequeñas y medianas empresas de todo el país, las cuales se han dirigido en reiteradas oportunidades a este Congreso para solicitar la sanción de esta ley y, particularmente, para apoyar esa norma, la cual —reitero— de manera incomprensible fue eliminada en la sanción dada en la Cámara de Diputados.

Esa eliminación que hizo la Cámara de Diputados del artículo 47 es inexplicable porque era quizás el punto que había recogido mayor adhesión de todos por la profunda connotación social que tenía al incorporar de nuevo al crédito o al giro comercial a millones de argentinos que, como consecuencia de las sucesivas coyunturas recesivas de nuestro país, habían quedado afuera del giro comercial. Sin embargo, inexplicablemente, dicho artículo fue eliminado por parte de la Cámara de Diputados.

Por eso, hicimos un trabajo importante en la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar en segunda revisión la sanción originaria del Senado, que es la que hoy estamos considerando, y hemos llegado a un consenso prácticamente unánime en esa comisión en el sentido de aprobar con mayoría calificada —más de dos tercios de votos— la sanción de este proyecto que le permitirá al país contar con una herramienta fundamental inscripta en el marco de la defensa del derecho a la intimidad, establecido

por el artículo 43 de la Constitución Nacional, y que no pudo ser reglamentado.

Algunos autores plantean a través de la doctrina que, en realidad, el recurso de hábeas data es un capítulo de la ley del recurso de amparo y que se hace mal en tratarlo separadamente de aquél. De allí que indican que, tal vez, el proyecto en tratamiento vaya mucho más allá del recurso de hábeas data que prevé la Constitución Nacional, que de acuerdo a ese sector de la doctrina fue entendido como una variante del recurso de amparo.

En realidad, quizás tengan razón los autores que plantean esta alternativa. Pero sucede que el proyecto en tratamiento va mucho más allá del mero recurso de hábeas data y, tal como lo dice su título, será una ley de protección de datos personales. Reitero, va más allá del solo recurso de hábeas data y de allí que este Senado, que tuvo la iniciativa en ambos temas —hábeas data y amparo—, lo separa del recurso de amparo, a pesar de que ambos están contenidos en una misma cláusula de la Constitución.

Por eso reitero que el proyecto en tratamiento no comprende el estricto instituto de hábeas data sino que es un proyecto de ley integral de protección de los datos personales.

Este Senado, preocupado por la posibilidad de que caduque nuevamente esta iniciativa tan importante y reclamada por sectores amplios del pueblo argentino, la producción, el trabajo y la doctrina constitucional, se dirigió en reiteradas oportunidades al Poder Ejecutivo para que incluya este asunto en los temas a tratar en el período de sesiones extraordinarias y a la Cámara de Diputados para que no deje caducar el proyecto de modo tal de llegar a esta instancia. Es decir que este Senado permanentemente tuvo iniciativas, luego de su sanción, tendientes al impulso de este tema, que finalmente tratamos postergadamente, para cubrir este verdadero reclamo en materia constitucional relativo al derecho de las personas.

Si analizamos el derecho comparado vemos que hay un número elevado de países que ya han intentando limitar el uso de los avances informáticos en lo que hace al llamado derecho a la intimidad. Entre otros se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Reino Unido, Nueva Zelanda, Portugal, entre otros. Estos países han avanzado en distinta legislación vinculada con la protección de datos personales.

En trámite parlamentario de leyes similares a la que está en tratamiento, obviamente además



de nuestro país, podemos citar a Corea, República Checa, Eslovenia, Italia, Grecia y México. Sus respectivos parlamentos están tratando diversos proyectos y previendo diferentes mecanismos de protección de la intimidad y de los datos personales.

En el derecho público provincial, como siempre, algunas provincias se adelantaron a la Nación en materia constitucional y legislativa y, como en este caso, en materia de algunos institutos que, en efecto, fueron consagrados en la Constitución de 1994 luego de haber sido desarrolladas en el derecho público provincial. Por ejemplo, las formas de democracia semidirectas. Estas fueron desarrolladas ampliamente en las Constituciones provinciales y en la nacional se incorporó recién a partir de la reforma de 1994.

En nuestro país este asunto también fue contemplado por el derecho público provincial. Pero solamente una provincia, la de Jujuy puntualmente, incorpora la acción judicial mediante la ley de hábeas data. Concretamente, lo hizo a través de la ley 4.444. Pero hay ordenamientos provinciales que incorporan al hábeas data en el marco del derecho a la intimidad o como el derecho al acceso a la fuente de información, que sería lo mismo. En este sentido, podemos mencionar a la provincias de Córdoba, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, San Juan, San Luis, Río Negro y Buenos Aires. Los distintos regímenes constitucionales —reitero— de estas provincias han incorporado al hábeas data en sus dos matices: como derecho a la intimidad o como el derecho al acceso a las fuentes de información.

Hay documentos internacionales al respecto, como el de las Naciones Unidas de 1991: "Las directrices para la regulación de ficheros automáticos de datos personales"; el del Consejo de Europa en 1985, que celebró un convenio sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos con carácter personal, el de la Unión Europea de 1999. Es decir, también en la comunidad internacional se ha llevado adelante este tipo de legislación.

En cuanto a la forma como se define al hábeas data, podemos observar la doctrina española. En el libro *La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales*, de Olga Estadella Yuste, se dice que "la fundamentación jurídica del derecho a la protección de datos personales cabe relacionarlo con el derecho a la intimidad".

Es decir, la ubicación constitucional o la naturaleza jurídica de este derecho hay que encontrarla en la defensa del derecho a la intimidad. En el mismo libro, cuando habla del derecho a la protección de datos, se dice que "está relacionado con aquellos datos que hacen referencia a una persona física identificada o identificable y que han sido objeto de una actividad realizada, en parte o en su totalidad, con ayuda de procedimientos automatizados, es decir, operaciones de registro de datos, aplicaciones a esos datos de operaciones lógicas aritméticas, su modificación, borrado, extracción o difusión".

En la doctrina tradicionalmente se han utilizado dos modelos para resguardar el derecho a la protección de datos personales. Están las leyes de carácter sectorial y las leyes omnibus. En nuestro país nos estamos enrolando en la segunda corriente, la que utiliza las llamadas leyes de carácter omnibus, que son leyes mucho más completas. Como dije antes, avanzan mucho más allá del hábeas data.

En cuanto al contenido de este proyecto de ley que estamos tratando, decía recién que en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos hecho un trabajo importante, de consenso, para analizar las modificaciones que llevó adelante la Cámara de Diputados. Han sido innumerables los sectores que se han acreado con objeciones y propuestas, tanto del Poder Ejecutivo como de organizaciones vinculadas a bancos de datos. Nos hicieron llegar sus particulares objeciones, algunas de las cuales hemos podido tomar en cuenta. Dado que el tratamiento de este proyecto de ley se encuentra en la etapa de la segunda revisión es muy poco lo que pudimos contemplar.

Voy a nombrar un par de cuestiones que merecieron especial debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales; seguramente, muchos de estos temas se van a tocar en este debate.

Una se refiere al artículo 1º del proyecto de ley. La Cámara de Diputados modificó la sanción del Senado, creemos que con una mala técnica legislativa y una incorrecta comprensión del espíritu y de la letra del proyecto que estamos tratando, incorporando dentro de los bancos de datos privados los destinados a dar informe a los bancos de datos de los archivos periodísticos. En ese sentido, los bancos de datos, según la sanción del Senado, tanto en su espíritu como en la letra, que se refieren a archivos periodísticos integran la fuente de infor-



información periodística y no están destinados a dar informe. Entonces la Cámara de Diputados, en un exceso, incorpora —comete no diría un error, pero sí una sobreabundancia— y, primero, divide lo que son bancos de datos de fuentes de información periodística. Esto, en la sanción del Senado, y no hay ninguna duda que en la doctrina, está integrado. El banco de datos de los archivos periodísticos está integrado a las fuentes de información periodística. Y eso es lo que estableció la sanción del Senado. Además, no están destinados a dar informes los bancos de datos de las fuentes de información periodística, de modo que no están regulados por este proyecto de ley.

Pero la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que la gente de ADEPA y de otras entidades que agrupan a organizaciones de prensa hizo el planteo en la comisión, incluyó una modificación al artículo 1º, en la cual se deja expresa reserva de que los bancos de datos de las fuentes de información periodística no estarán contenidos en esta ley.

De todos modos, en función de que la Cámara de Diputados modificó con dos tercios este proyecto de ley, se requiere la misma mayoría para que el Senado insista en su sanción anterior.

En homenaje al consenso con el que hemos trabajado en la comisión sobre este tema y, en realidad, a pesar de que no estoy de acuerdo con esta modificación que introdujo la Cámara baja porque, reitero, es de mala técnica legislativa, sobreabunda y aclara lo que no es necesario porque no está regulado por este proyecto de ley, teniendo en cuenta lo que propone el bloque de la Alianza, entre las modificaciones que se van a plantear en particular está específicamente la de aceptar el artículo 1º tal como viene de Diputados. Para mantener el clima de consenso, creo que no habría problemas en aceptar este artículo, que —reitero— creo que es defectuoso desde el punto de vista de la técnica legislativa y sobreabundante desde el aspecto práctico.

Hay otro tema que contempla esta iniciativa y que voy a leer con la anuencia de la Cámara para aquellos legisladores que no son miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata de una síntesis de los principales tópicos que trata este proyecto de ley, que es bastante complejo. Va más allá del hábeas data, pero tiene una gran profundidad.

Ya dijimos que el objeto de la ley está en el marco de la defensa del honor y la intimidad de las personas. El proyecto establece que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Los que se refieren a su filiación política, ideológica, gremial, filosófica, a sus convicciones religiosas o morales, sindicales, o información referente a su salud o a su vida sexual. Estos serían datos sensibles que ninguna persona está obligada a proporcionar. La ley sólo lo autorizaría cuando este tipo de datos tienen como objeto estadísticas o alguna finalidad científica y no puedan ser individualizados sus titulares. Reitero que la única manera en que se autoriza a establecer bancos de este tipo de datos sensibles de la persona es que tengan carácter científico o estadístico y que no sea posible identificar a quienes poseen esas características.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, señor Luis A. León.

**Sr. Yoma.** — La recolección de datos no puede hacerse obviamente por medios desleales o fraudulentos, ni estos pueden ser utilizados con una finalidad distinta o incompatible con aquella que motivó su obtención.

¿Cuándo es ilícito el tratamiento de datos de carácter personal? Cuando el titular no hubiere dado su consentimiento expreso. No hace falta el consentimiento expreso cuando los datos se obtengan de fuentes accesibles al público. Allí no es necesario dicho consentimiento. Tampoco cuando esos datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado ni cuando se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, ocupación, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono de las personas, ni cuando se deriven de una relación contractual y resulten necesarios para su cumplimiento ni cuando se trate de operaciones que realicen las entidades financieras y de informaciones que reciban de sus clientes conforme con las disposiciones de la ley 21.526, de entidades financieras.

¿Qué derechos tienen los titulares de los datos en virtud de esta ley? Tienen derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal, incluidos los bancos de datos públicos o privados destinados a dar informes. El requerido deberá cumplir con la obligación de suministrar dicha información. De no acce-



der a la requisitoria formulada por el titular de los datos, quedará para éste expedita la vía de la acción judicial.

Por otra parte, toda persona tiene derecho a obtener la rectificación, actualización, supresión o el sometimiento a confidencialidad de los datos personales de los que sea titular. La rectificación es sin cargo alguno para el titular de los datos.

En la prestación de servicios de información crediticia —que es un tema que ha sido motivo de opinión de organizaciones intermedias y comunitarias en el tratamiento en comisión— sólo pueden brindarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito. Es decir, en virtud de esta norma, en la prestación de servicios de información periódica sólo pueden ser incorporados datos de carácter patrimonial que tengan que ver con la solvencia económica de las personas, y obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de información facilitada por el propio interesado.

Existen también dos aspectos importantes que fueron motivo de tratamiento en el Senado. En ese sentido vamos a aceptar la modificación planteada por la Cámara de Diputados en el artículo 26, inciso 4. El Senado había establecido originariamente que los bancos de datos de información crediticia sólo podían contener los datos acerca de la potencialidad crediticia de una persona durante cinco años. La Cámara de Diputados modificó la redacción de este artículo, reduciendo ese plazo a dos años cuando la persona hubiese cancelado su obligación comercial. En consecuencia, los bancos de datos de información crediticia sólo pueden tener los datos personales de una persona durante un término de dos años una vez cancelada su obligación comercial.

Por último, señor presidente, el artículo 47 —incorporado por el Senado e insólitamente eliminado por la Cámara de Diputados— ha generado una gran expectativa en millones y millones de pequeños y medianos empresarios, comerciantes y empleados que hoy se ven prácticamente inhabilitados de acceder al crédito porque sufren una suerte de sanción penal en virtud del abuso que las organizaciones de información crediticia han llevado adelante con su accionar.

Sin ir más lejos, en el diario Clarín de hoy aparece un fallo de la Justicia que condena a las organizaciones de información

crediticia —creo que es Veraz— a pagar una indemnización a una persona cuyos datos mantuvo en forma incorrecta durante un cierto lapso. Es decir, existen ya fallos judiciales al respecto, y en dichos fallos se le pide al Congreso la sanción de esta norma para poder establecer así un marco regulatorio de la protección del derecho a la intimidad y para terminar —reitero— con esta verdadera sanción penal en el sentido de que a millones y millones de argentinos se los somete a través de estas organizaciones de información crediticia.

Por último, quiero decir algunas palabras respecto de este artículo 47. Quizá, la redacción que incluimos en oportunidad de sancionar la norma en el Senado no haya contemplado la totalidad del espíritu que tiene este artículo. ¿Por qué digo esto? Porque la redacción dice que toda aquella persona que haya cancelado —y utiliza esta palabra— su obligación comercial al momento de la sanción de esta ley tiene derecho a ser borrada o a pedir ser borrada de los bancos de datos de información crediticia.

La palabra "cancelado" no incluye solamente el significado de que la obligación comercial haya quedado extinguida, sino que abarca también —y éste es el espíritu de la ley, y quiero que quede como una interpretación cabal de la voluntad del legislador— a aquel que haya regularizado una situación de mora al momento de la sanción de esta ley. Entonces, la palabra "cancelación" no sólo comprende —reitero— al que haya extinguido la obligación comercial y tiene derecho a ser eliminado de las bases de datos de información crediticia, sino también a aquel que haya regularizado una situación de mora y, entonces, tenga derecho a ser eliminado de estos bancos de datos.

Como sé que el término obviamente en el futuro puede prestarse a ser interpretado por los jueces de manera restrictiva y no amplia, como es la voluntad y el espíritu del legislador, junto con el senador Molinari Romero, que me acompaña en este proyecto, propongo que inmediatamente después de votada esta norma, votemos un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, al momento de reglamentarla y, específicamente en el artículo 47, contemple el espíritu con el cual el Senado la ha votado. reitero que tiene que ver no solamente con quien cancela o extingue su obligación crediticia sino también con aquel que la ha regularizado. Vamos a proponer que se vote este



proyecto de comunicación inmediatamente después de sancionada esta norma.

Con esto finalizo mi exposición en general. En particular, hay una serie de artículos sobre los que vamos a aceptar modificaciones propuestas, que nos han hecho llegar algunos legisladores. Anticipo que no vamos a aceptar demasiadas modificaciones, porque han sido muchísimos los sectores públicos y privados que se han acercado a sugerirlas, y si nuevamente abrimos el consenso logrado de manera excesiva corremos el riesgo de frustrar otra vez la sanción de esta norma.

Por estas razones vamos a acercar a Secretaría la lista de artículos con modificaciones que los distintos senadores y bancadas han hecho llegar al proyecto que estamos tratando que, básicamente, es la sanción originaria del Senado.

**Sr. Presidente (León).** – Tiene la palabra el senador Molinari Romero. Lo sigue en la lista el senador Branda.

**Sr. Rodríguez Saá.** – ¿Me anota en la lista, señor presidente?

**Sr. Presidente (León).** – Primero, el senador Molinari Romero; después el senador Branda y, luego, seguirá el senador por San Luis.

**Sr. Molinari Romero.** – Señor presidente: realmente es un lujo que usted me conceda el uso de la palabra esta tarde.

Después de esta exposición tan meticulosa que ha hecho el senador Yoma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es poco lo que podemos agregar en esta fundamentación en general. Por supuesto, adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical.

Antes de pasar a hacer algunas consideraciones, quiero destacar el trabajo que en distintas etapas y tiempos hicieron los dos senadores por La Rioja; originalmente, el señor senador Menem y, en este momento, el senador Yoma como presidente de la Comisión. Se trata de un tema que, tal como bien él lo ha señalado, es novedoso después de la reforma constitucional de 1994; además abre abanicos de posibilidades y roza una cantidad de intereses, por supuesto muchos de ellos legítimos dentro del país. Es por ello que es muy difícil la tarea de buscar consenso y de encontrar una norma que encuentre un punto de equilibrio. Por eso –reitero– destaco públicamente la tarea de la Comisión.

La reforma constitucional de 1994 incorporó expresamente la protección de los datos perso-

nales en el artículo 43, por todos conocido. Como bien lo ha señalado el senador Yoma, acá estamos yendo más allá de lo que la propia Constitución establecía al regular la acción de hábeas data. Estamos llenando un vacío de la legislación argentina en cuanto hace a la regulación de todo aquello relativo a la información, a los datos personales.

Sabido es que el desarrollo y el avance de las tecnologías informáticas que impactan hoy día a día a todo el mundo ponen en riesgo uno de los aspectos del derecho a la intimidad o a la reserva de la propia vida privada, que es el relativo al control sobre la información personal, que nos pertenece a cada uno de nosotros. Por lo tanto, toda esta legislación ha tenido que discorrir entre dos andariveles: regular aquel derecho y no impedir el desarrollo del comercio que implica hoy el avance de esas tecnologías informáticas.

Los datos personales de cada uno de nosotros, una vez consignados en algún registro, con nuestro consentimiento o sin él, ingresan en un ámbito en el cual el titular de esos datos no puede controlarlos, ni siquiera acceder a ellos. No sabe para qué son utilizados, ni siquiera si en el registro de qué se trata los datos de nuestra persona constan exacta o acertadamente, si son erróneos o han quedado absolutamente desactualizados.

Estos datos, y ésta es una característica de estos tiempos, son utilizados para muy diversos fines. Uno de ellos, tal vez el más frecuente hoy, es aquel que tiene que ver con determinar el perfil de una persona como consumidor o como deudor, y en función de esos perfiles, seguramente se le acordará o negará créditos: se celebrarán contratos o no con la persona de que se trate o se lo desechará lisa y llanamente como contraparte, o tal vez –incluso como algo visto últimamente– se lo designará o no en algún puesto de trabajo, de acuerdo –reitero– con esa información que consta en la base de datos.

Este proyecto de ley que vamos a sancionar esta tarde viene a llenar ese vacío normativo de nuestra legislación argentina. Genera un marco regulatorio que es apto para garantizar la protección de los datos personales y el derecho de las personas al control sobre la propia información y, al mismo tiempo, como decíamos recién, brinda un marco adecuado para el desarrollo de las actividades empresariales que estén vinculadas con este sector.



En nuestro país hemos sido testigos del abuso en muchos casos por parte de bancos de datos que registran información incorrecta, luego la difunden y, ante el reclamo de los afectados, dificultan tanto el acceso a la información como la posibilidad efectiva de corrección o eliminación de los datos erróneos, dejando a la persona en un verdadero estado de indefensión, que esta ley aspira a superar.

La ley garantiza el derecho de acceso a la propia información, el derecho de rectificación de los datos erróneos incompletos, el derecho de confidencialidad frente a los datos sensibles, como aquellos vinculados con las creencias religiosas o políticas o, incluso, con las orientaciones sexuales, y el derecho a la actualización de los datos.

La ley que estamos por aprobar, señor presidente, prevé además un mecanismo procesal ágil y eficaz para la defensa de los derechos de los titulares de la información. Creo que estamos dando un paso muy importante dentro de la legislación argentina, saldando —como bien lo relataba el señor senador Yoma— una deuda pendiente de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, con la certeza de que estamos incorporando a la legislación argentina un instrumento a la altura de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia. Por eso reitero nuestro pedido de aprobación para este proyecto.

**Sr. Presidente (León).** — Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: voy a ser muy breve porque ya es la segunda vez que tratamos este proyecto de ley en el recinto.

Bien lo ha dicho el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales: se trata de una deuda que tiene el Congreso de la Nación en un tema tan sensible como es el de los bancos de datos personales.

Por eso me parece que hoy estamos cumpliendo con la sanción de una de las veinte leyes que necesariamente debía sancionar el Congreso luego de la reforma constitucional. Quedan algunas pendientes. Espero que nos pongamos a trabajar y finalmente tengamos todas las leyes ejecutivas necesarias —también están las programáticas en la Constitución— para que la Nación cuente con las normas adecuadas en este sistema democrático.

considerado para hacer el dictamen que resultó aprobado y girado a la Cámara de Diputados.

Con respecto a este proyecto de ley venido en revisión al Senado, debo decir que coincido con el bloque de la Unión Cívica Radical para obtener los dos tercios necesarios e insistir en el proyecto original. En largas conversaciones de consenso, hemos coincidido en bastantes temas.

La propuesta que realiza la Comisión coincide en parte con la que yo formulara. Propongo aceptar algunas modificaciones de la Cámara de Diputados, más concretamente las realizadas en el artículo 5º, apartados 1 y 2, inciso c), en coincidencia con la propuesta del bloque radical.

Además, propongo aceptar las modificaciones de la Cámara de Diputados a los artículos 19, 21 último párrafo y 25 *in fine*. En el tratamiento en particular voy a fundamentar este pedido.

Por economía legislativa voy a pedir una inserción porque fui quien informó el proyecto de ley anterior, vetado por el Poder Ejecutivo.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente: en ocasión de la reforma constitucional de 1994, entre otros derechos de "tercera generación", se estableció expresamente el derecho de toda persona de tomar conocimiento de sus datos personales que consten en bancos de datos y, en caso de falsedad o discriminación, exigir por vía de amparo la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos.

Esta nueva garantía prevista en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, aún no se encuentra protegida por una ley especial. El veto total que en diciembre de 1996 el Poder Ejecutivo hiciera a la ley 24.745 sancionada por el Congreso Nacional, provocó que continuara el vacío legal en este delicado tema.

Analizando objetivamente el proyecto de ley sancionado, los numerosos proyectos presentados en ambas Cámaras, y especialmente observando la realidad de los hechos respecto de la indefensión en la que se hayan las personas ante el tratamiento irresponsable que hacen algunos bancos de datos de delicada información personal, nace la necesidad de una urgente regulación legal de esta garantía de manera equitativa y razonable, pero sin descuidar el fin último de la norma constitucional.

Así, y en uso de las facultades que la Constitución otorga al Congreso Nacional "de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen... el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución" (artículo 75, in-



ciso 23), se ha considerado conveniente en el proyecto regular esta materia a través de una autoridad de control especial, ya que de otro modo los particulares se verían en la necesidad de hacer reclamos judiciales por vía de amparo ante cada violación de su derecho, y como sabemos, estos últimos en la mayoría de los casos no se encuentran en igualdad de condiciones respecto de los titulares de los bancos de datos para litigar ante la justicia. En efecto, si ante cada error o falsedad en el banco de datos el particular debe recurrir a un abogado para hacer valer su derecho, por una cuestión de sentido común se deduce que los reclamos judiciales serán mucho menores en proporción a las faltas cometidas por los responsables de bancos de datos, con lo cual la violación al derecho constitucional que se pretende amparar será la regla.

Si a pesar de la actuación de la autoridad de control, opera una violación a la garantía constitucional, el particular podrá recurrir a la justicia a fin de que por vía expedita resguarde su derecho, mediante el procedimiento especial de hábeas data, que se asemeja a la acción de amparo.

Francia fue precursor en la regulación de la materia que nos ocupa, pero su ley del año 1978 ha quedado superada por la realidad actual, que nos muestra a la informática como una herramienta diaria para la realización de todo tipo de actos jurídicos, trámites y autorizaciones. Es rescatable en cambio la legislación portuguesa del año 1991, por lo que se adapta más a la realidad actual del manejo de información de carácter personal a través de bases o bancos de datos.

La regulación legal de esta especial garantía constitucional, por su novedad tanto en nuestra doctrina y jurisprudencia nacional como en los ordenamientos jurídicos de otros países, no es tema que escape al surgimiento de controversias, pero la realidad de nuestro país indica que es necesario un especial control en la materia.

**Sr. Branda.** — Es una alegría poder votar este proyecto de ley para que hoy tenga la sanción que, estoy seguro, le va a dar el Senado de la Nación.

La aprobación de este proyecto es una necesidad porque muchas veces la población se ve en listas negras. En esta economía, en la que evidentemente no hay ningún control sobre la base de datos, los ciudadanos muchas veces se ven impedidos del acceso al crédito y de la posibilidad de adquirir a crédito algunos elementos necesarios; y esto es realmente una discriminación que no se merece el sector más humilde de nuestra población.

Por eso voy a votar con alegría este proyecto, a través del cual en última instancia restaurar a aquellos muertos

civiles —quienes están en algunas listas son verdaderos muertos civiles— que no tienen acceso al crédito y están excluidos de los beneficios de una economía moderna y de avanzada.

Por estas razones, señor presidente —como decía—, voy a votar con mucha alegría este proyecto de ley.

**Sr. Presidente** (León). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: este proyecto de ley tuvo sanción del Senado hace más de un año, según creo. Luego, se produjo la sanción de Diputados y ahora viene en revisión.

No tuve oportunidad de expresarme cuando la iniciativa fue sancionada por el Senado porque no me había incorporado a este cuerpo. Así que ahora quiero manifestar mi pensamiento sobre la norma. Sé que el proyecto tendrá sanción definitiva solamente si aceptamos las modificaciones introducidas por Diputados. Yo quiero expresar que mi voto —que será negativo— es en realidad en contra de esta ley. Pensaba votar en contra y después de escuchar a los miembros informantes, a los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, he ratificado mi convicción de votar en contra, porque es una norma que retrocede sobre lo establecido en la Constitución y en los tratados y pactos internacionales. Es un retroceso, no un avance.

La Constitución tiene un capítulo de derechos y garantías. En realidad, todos los derechos de la Constitución generalmente vienen a proteger al ciudadano de los avances y abusos que pueda cometer el Estado. Y las garantías son las formas de procedimiento que se establecen precisamente —y valga la redundancia— para garantizar el fiel cumplimiento de estos derechos; sobre todo, para poder ejercerlos cuando el Estado comete abusos.

En ese sentido, hay tres garantías especiales, que son: el amparo, el hábeas corpus y el hábeas data. Algunos consideran que del amparo se desprende el hábeas data.

De todas maneras, algo hay que empezar a tener en claro: estas garantías constitucionales pertenecen al campo del derecho procesal constitucional, del procedimiento constitucional. Algunos autores consideran que se trata ya de un derecho autónomo, porque realmente comprende la mejor parte de los derechos humanos —y



la que está más olvidada—, que es la defensa y el ejercicio en plenitud de todos los derechos humanos que nos conceden la Constitución y las leyes.

¿Cuál es el defecto de esta norma? Observe, señor presidente, que tiene —para ser preciso— 49 artículos, de los cuales, los primeros 32 no se refieren al hábeas data, no son una garantía constitucional, no son reglas de procedimiento constitucional. Recién comienza a hablarse del hábeas data a partir del artículo 33, y yo considero que muy pobremente, lo que significa además un retroceso sobre la Constitución, porque la defensa que se le otorga al ciudadano que ha sido invadido en su intimidad, respecto de cuya persona se ha falseado la verdad, es el juicio sumarísimo; y todos sabemos que un juicio sumarísimo que establece el Código Procesal Civil, en el mejor de los casos dura meses y, en el peor, dura años. Entonces, más que un remedio, este procedimiento parece una condena procesal.

¿Por qué lo considero un retroceso? Al respecto, recuerdo un artículo del profesor de Derecho Administrativo Agustín Gordillo en la revista "La Ley", que se titulaba algo así como: "Un paseo por el foro". El profesor Gordillo escribe este artículo a raíz de la incorporación de los tratados internacionales, y el tema al que se refería era el amparo. Y dice que a partir de la incorporación de los tratados internacionales no sólo rige para nuestro país la ley de amparo argentina, sino que rigen todos los institutos: el que establece la Constitución y además las referencias al amparo que establecen los tratados internacionales, como el de Derecho Político, de Nueva York, el Tratado de San José de Costa Rica, etcétera.

Respecto del hábeas data sucede lo mismo. No sólo tenemos la garantía que da la Constitución Nacional sino los tratados internacionales. Entonces, al poner plazos tan contrarios a las expectativas de las partes, como son los plazos de los juicios sumarísimos, prácticamente estamos retaceando los derechos de la Constitución. Más que un avance, esta norma —sostengo— constituye un retroceso.

Si nosotros revisamos el juicio de amparo —y esto es lo grave—, debemos preguntarnos contra qué actos o contra quién se hace dicho juicio. Este juicio se lleva a cabo cuando se menoscaban los derechos constitucionales de una persona cuando existen abusos por parte del

Cuando dictemos la ley de amparo, con la que estamos en deuda —esto ocurriría la próxima semana o dentro de poco tiempo—, a nadie se le ocurrirá legalizar los abusos del Estado. A nadie se le ocurrirá dictar una ley omnibus sobre todo lo que es la administración pública y, al final, incluir un capítulo sobre el amparo.

En oportunidad de la regulación del hábeas corpus, que es un remedio frente a la detención ilegal por parte de un organismo del Estado— aquí no corresponde incluir el caso de los individuos, que se encuadraría en la figura de un delito como es el secuestro—, o sea los abusos que el Estado pueda cometer sobre la libertad de una persona deteniéndola, a nadie se le podría ocurrir agregar un capítulo anterior o toda una legislación referida a la detención ilegal de las personas. Es algo imposible de legalizar o legitimar.

En el caso del hábeas data estamos poniendo juntas dos instituciones totalmente distintas. Por un lado, el derecho procesal constitucional al hábeas data, que es un resguardo al artículo 19 del derecho a la intimidad y a la verdad de cada uno acerca de su persona. De hecho, es un asunto muy fácil de solucionar, porque generalmente un dato —al menos en el 90 por ciento de los casos— se comprueba por la simple presentación de una documentación fehaciente. No se requiere apertura a prueba ni nada por el estilo. Entonces, con la existencia de una ley de procedimiento de hábeas corpus corriendo traslado al banco de datos en un término de 48 horas, el juez, una vez emitido el informe, ordenará con la documentación fehaciente en su mano, la inscripcón del dato correcto, y así estaríamos solucionando el problema. Además, por supuesto, es sumamente correcto establecer los daños y perjuicios, porque así terminaríamos con este tipo de instituciones que hoy, con el argumento de combatir, estamos legalizando.

Por supuesto, debemos tener en cuenta el derecho a la información, que sería la contracara que estamos regulando. En lo personal, considero que se trata de un derecho que habría que dejar absolutamente en libertad. Nosotros no tenemos que regularlo. Cometeríamos un terrible error al hacerlo, ya que lo estaríamos legalizando o legitimando.

Este derecho —que es subjetivo, por supuesto, y ha cobrado auge con el tema de la informática— era bastante peligroso en el caso de las listas negras a las que hizo referencia el señor



senador Branda, sobre todo cuando esos datos están en manos del Estado. ¡Y observe, señor presidente, que de lo que menos se preocupa este proyecto de ley es del problema de los datos que tiene y maneja el Estado! ¡En las épocas de las dictaduras militares cuántas personas hubieran tenido otro final si hubiese existido un remedio así y jueces que lo aplicaran! Habría sido posible revisar los archivos monstruosos de la SIDE y de otros organismos del Estado, que realmente vuelcan datos sensibles menoscabando, por supuesto, el derecho a la intimidad y a la persona humana; y este proyecto de ley no se refiere a nada de esto.

Señor presidente: las garantías constitucionales se han creado para defender al ciudadano frente al Estado. Frente a un particular, como serían estos datos de personas, grupos o asociaciones que se dedican a informar, invadiendo muchas veces la intimidad y falseando los datos, el problema se remedia muy fácilmente mediante un recurso rápido que ordene la rectificación del caso y, además, con una condena por daños y perjuicios. De esa forma, tendríamos una ley absolutamente razonable, mucho más rápida, mucho más segura y evitaríamos la legalización de este tipo de organismos.

Por eso, señor presidente, no quiero entrar ahora en mayores consideraciones porque en realidad, cuando leo este proyecto de ley, hasta el artículo 33, estoy en desacuerdo con toda esta legalización de todos estos organismos que se dedican a invadir la intimidad de las personas, a controlar la vida económica de los ciudadanos y a controlar los contratos muchas veces en forma extorsiva y abusiva, generalmente en forma extorsiva y abusiva.

Señor presidente: nosotros estamos legalizando esos procedimientos. Esto es lo horroroso de este proyecto de ley: es una norma de controles, cuando estamos viviendo la era no sólo de la informática sino de la libertad.

Por ello, señor presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley. Creo que con estas manifestaciones dejo en claro que estoy absolutamente en contra de todo el proyecto de ley. Desearía, si es posible, que se analice la posibilidad de volver esta iniciativa a comisión para que caduque, cuando llegue el momento, o para que se dicte un proyecto de ley absolutamente distinto al que estamos considerando.

**Sr. Presidente (León).** – Tiene la palabra el

**Sr. Romero Feris.** – Señor presidente: voy a ser lo más breve posible con respecto a este tema, teniendo en cuenta sobre todo que trataremos de terminar hoy con la consideración de este proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados.

Cuando se trató en este Honorable Senado el proyecto de ley cuya revisión estamos considerando, señalé que la iniciativa presentaba un excesivo reglamentarismo y que, en sustancia, estaba destinada a regular aspectos que excedían la acción de hábeas data.

En 1995 presenté un proyecto reglamentario de esta acción. Consideraba que ello implicaba colaborar con la sanción de una de las leyes que manda sancionar la reforma constitucional de 1994.

Mi proyecto estaba diseñado de una manera bastante clara y concisa. Lo redacté de forma tal que en sólo cinco artículos se establecía el marco operativo necesario para que todos los habitantes de nuestro país –tanto las personas físicas como las jurídicas– pudieran ejercer esta garantía y proteger adecuadamente sus derechos.

El objeto era normar en forma integral sobre los archivos y bancos de datos electrónicos. Advertí que la regulación resultaba en extremo casuística y, en definitiva, podía tener como efecto demorar la implementación del hábeas data, que es la garantía que debemos asegurar a todos los habitantes.

Debo insistir, señor presidente, en que la doctrina de nuestros constitucionalistas –Bidart Campos, Ekmedjian, Vanossi, entre otros– afirma que la norma constitucional vigente debe considerarse operativa aún sin norma que la reglamente, dado que constituye una nueva garantía constitucional dentro del género del amparo que debe ser aplicada por los jueces con los elementos procesales que prevé la legislación vigente.

Los tribunales de la Nación también se han pronunciado sobre su directa operatividad desde el caso “Rosetti c/Dunn & Bradstreet”, de 1995.

El proyecto, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro del plazo de 180 días –artículo 48– y nada dice acerca de las numerosas sanciones que están tramitándose en la actualidad, está demorando la implementación de la garantía.



Reitero, señor presidente, que es imprescindible que una cláusula transitoria o, en su caso, una norma complementaria aclare en forma inequívoca que la acción de hábeas data es directamente operativa y que en ninguna circunstancia podrán paralizarse las acciones en trámite.

Desde mi punto de vista el capítulo VII "De la tutela judicial" aprobado por la Cámara de Diputados, aunque continúa siendo extremadamente casuista, ha simplificado el trámite procesal previsto en la sanción del Senado y, en ese sentido, merece mi apoyo.

Advierto también...

**Sr. Menem.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero Feris.** — ...que el proyecto ha reformulado y aclarado el tema de la competencia.

**Sr. Presidente (León).** — El señor senador Menem le solicita una interrupción, ¿se la concede?

**Sr. Romero Feris.** — Sí.

**Sr. Presidente (León).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: me parece haber escuchado que el señor senador dice que la sanción de Diputados ha simplificado la del Senado.

Es totalmente al revés.

**Sr. Romero Feris.** — Dije que es casuístico.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: es al revés.

Mientras el Senado prevé una acción, Diputados la complica previendo tres acciones.

No sólo es casuístico, sino que además la sanción de Diputados complica todo el procedimiento al establecer distintos tipos de acciones, que en muchos casos las van a tener que ejercer en forma acumulativa. Además podrían ser rechazadas, precisamente por no tener la debida claridad.

Esto se evitaría con lo establecido en la sanción del Senado, es decir con una sola acción, ya sea para rectificar, actualizar o suprimir los datos.

Me permití interrumpirlo porque consideré que traía confusión decir que la sanción de Diputados simplificaba la del Senado.

Contrariamente, es al revés; la complica.

Muchas gracias, señor senador.

**Sr. Presidente (León).** — Continúa en uso la palabra el señor senador Romero Feris.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: le digo con todo respeto a mi amigo el señor senador Menem que soy respetuoso de todas las opiniones. Pero esta es la postura que he adoptado, teniendo en cuenta el análisis que hemos efectuado con el doctor Carlos Colautti y otros asesores.

Por eso es que fijo esta posición, independientemente de que el senador Menem pueda tener razón o no. No me adjudico tener la razón de todo lo que afirmo. Es una opinión, y soy respetuoso de todas las opiniones.

Prosigo, señor presidente.

Advierto también que el proyecto ha reformulado y aclarado el tema de la competencia, estableciendo en forma expresa que los tribunales ordinarios en lo Civil serán competentes para entender en las acciones de conocimiento, de prevención y de reparación y que será el actor quien, a su elección, pueda optar entre iniciarlas en su domicilio, en el del demandado o en el del lugar de la amenaza, violación o intromisión ilegítima.

Esto debe ser considerado un avance, aunque continúa prevista la jurisdicción federal respecto de los registros, archivos, bases y bancos de datos interconectados en redes de alcance nacional.

Debo reiterar, señor presidente, que la misma índole de la actividad y los progresos de la informática hacen que las redes estén en la mayor parte de los casos interconectadas a nivel nacional.

De tal forma que la mayor parte de las acciones de hábeas data serán de competencia de la Justicia federal, lo que significa un menoscabo para las autonomías provinciales y su servicio de justicia, debido a una nueva concentración de poder en manos del gobierno federal.

Considero también que la presunción de la existencia de perjuicio indemnizable que establece el artículo 46 del proyecto constituye un elemento disuasorio frente a las lesiones que pudieran realizarse a través de los bancos de datos.

También encuentro acertado que se haya establecido una suma mínima de cinco mil pesos como piso de la indemnización. Pero estimo que en realidad se debió haber previsto el reajuste de este monto de acuerdo con depreciaciones monetarias, si las hubiere.

Finalmente y para terminar, un breve comentario acerca del último párrafo del artículo 1º,



que establece que en ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de la información periodística.

Considero que haber establecido esta garantía para la libertad de prensa constituye un acierto de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

En efecto, el artículo 43 de la Constitución Nacional, al dar rango constitucional a la acción de hábeas data, que como dijimos es directamente operativa, determina que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Esto me parece de gran trascendencia.

La regla del artículo 1º del proyecto de ley ratifica y especifica esa garantía. La interpretación judicial deberá respetar no sólo la fuente de la información sino también las informaciones que consten en las bases de datos.

De tal forma que, por la vía de una acción judicial, los medios no podrán ser obligados a modificarlas.

Debo subrayar que ello constituye una garantía esencial para la libertad de prensa. Si los medios estuvieran sujetos a la modificación de los datos que constan en sus archivos, eso implicaría que no podrían ser dados a conocer, lo cual generaría censura previa o autocensura.

Por las razones expuestas, señor presidente, manifiesto que no apoyo el dictamen de comisión que estamos considerando.

**Sr. Presidente** (León). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Señor presidente, distinguidos colegas: esta Cámara de Senadores está tratando por tercera vez la iniciativa sobre protección de datos, más conocida como ley de hábeas data. Y las tres veces lo ha hecho con un carácter procesal distinto.

La primera vez que la tratamos lo hicimos como Cámara revisora de una sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

La segunda vez lo hicimos como Cámara iniciadora de este proyecto.

Y la tercera –ahora– como Cámara revisora.

Los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han explicado cuál fue la suerte que corrió el proyecto de ley anterior. Es decir, sancionado por la Cámara de Diputados, fue modificado sustancialmente por el Senado. Entonces, volvió a la Cámara de Diputados, la cual

insistió en su sanción originaria y pasó al Poder Ejecutivo, el cual la vetó totalmente.

Luego presentamos este proyecto, que fue modificado en la Cámara de Diputados y, por eso, hoy viene nuevamente a nuestra consideración.

Hago esta introducción, porque indudablemente a esta altura ya hemos hablado bastante acerca de esta iniciativa sobre protección de datos, más conocida como ley de hábeas data. Es decir, ya fundamentamos el proyecto en general, por lo menos dos veces. Por lo tanto, me parece que sería sobreabundante volver a hacer una exposición en general sobre lo que significa este proyecto de ley, sobre todo después de la meticulosa y profunda exposición efectuada por el miembro informante.

De todos modos, como en esta instancia vamos a insistir en nuestra sanción anterior en la mayoría de los casos en que la norma ha sido modificada por la Cámara de Diputados, estimo pertinente efectuar algunas reflexiones, sobre todo con relación al aspecto teleológico del proyecto, para que se pueda interpretar mejor cuál es el sentido de las posiciones que adopte esta Cámara, ya sea al aceptar las modificaciones de la Cámara baja o al insistir en nuestra sanción original.

Permítaseme decir, en ese sentido, que este proyecto se inscribe en el ya mencionado carácter garantista de la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994.

Lo que nosotros sancionamos es una garantía que tiende a proteger ciertos y determinados derechos de la Constitución. Porque de nada bastaría la proclamación de los derechos, que con tanta amplitud y generosidad hace nuestra Constitución, si detrás de ello no existieran las garantías y los medios para su protección. Esto ya lo decía Alberdi en sus célebres *Bases* al afirmar que las garantías individuales proclamadas con tanta gloria, conquistadas con tanta sangre, se convertirían en palabras vanas, en mentiras relumbrosas si no se hacen efectivas por medio de las garantías públicas.

En este sentido, el artículo 43 de la Constitución Nacional es un verdadero núcleo de garantías constitucionales. Por ejemplo, están las garantías de la libertad personal por medio del hábeas corpus, la garantía general de los derechos con el amparo y, por supuesto, la protección de datos a través de la ley que hoy sancionaremos.



Recordemos que *habeas data* es una expresión que tiene una manifestación híbrida porque se integra con una palabra latina, *habeas*, y con una inglesa, *data*. Pero la traducción —de ahí que debemos entender de qué se trata— es tener los datos. Así como el *habeas corpus* es tener el cuerpo —traer el preso a la presencia del juez para analizar la privación de la libertad—, aquí de lo que se trata es de tener los datos para protección de quien es el titular de tales datos.

El objeto de la ley se puede sintetizar en varios aspectos principales.

En primer lugar, establecer como premisa —me parece que en algún caso no se la ha entendido bien— la protección integral de los datos de una persona. Este es el objeto general de la ley.

En este caso, hablamos de los datos que hacen a los derechos fundamentales de la persona: el derecho a la intimidad, al honor, a la honra, a la dignidad; ese verdadero núcleo fundamental previsto en el artículo 19 de la Constitución en lo que hace al derecho a la intimidad y los que están en las declaraciones de principios, derechos y garantías de la Constitución, enriquecidos con el capítulo incorporado en la reforma de 1994.

¿Cómo se hace efectivo ese derecho? ¿Cuáles son los medios, las vías y las acciones que tiene el ciudadano para poder garantizar esos derechos a través de esta acción de *habeas data*? ¿Cuáles son los derechos que tiene el individuo en esta materia?

En primer término, tiene el derecho de acceder a la información que existe en un registro. Todo ciudadano tiene derecho a conocer qué es lo que se dice de él en un registro destinado a dar información al público. Esto hay que señalarlo: hablamos de los registros destinados a dar información y no a cualquier registro o cualquier base de datos.

En segundo término, el ciudadano tiene derecho a que se actualicen esos datos, porque muchas veces la recopilación en las bases de datos no se actualiza y el dato no actualizado puede valer tanto como un dato erróneo.

En tercer término, tiene derecho a que se rectifiquen los datos erróneos que existen en esas bases o archivos de datos, en cuanto sean inexactos.

En cuarto término, tiene derecho a que se asegure la confidencialidad de aquellos datos que ha-

cen a ciertos aspectos de la intimidad, de la vida privada, que no tienen por qué ser públicos.

En quinto término, y es importante, se prohíbe el registro de la información sensible. Los denominados datos sensibles son los relativos a la característica de la persona, que no tienen por qué figurar en un registro destinado a dar información, como serían las creencias religiosas, las inclinaciones sexuales, etcétera.

Estos serían los aspectos fundamentales y los medios por los cuales se pretende que esta ley proteja los datos de las personas.

En esta filosofía de no hacer de nuevo una exposición general sobre el *habeas data* —me remito a la que hice al presentar el proyecto de ley cuando lo tratamos como Cámara iniciadora—, quiero manifestar que esta ley se torna mucho más imprescindible indudablemente por la presencia o magnitud que ha tomado la informática, potenciada por los avances en las telecomunicaciones, que coloca a los individuos en una situación de absoluta exposición de sus atributos de la personalidad a merced del uso incontrolado e incontrolable que quiere hacerse de ellos.

También quiero expresar que el objeto de la ley es el resguardo de la información personal respecto de toda actividad invasiva ilegítima de la esfera privada, de modo que sea efectiva la garantía de los derechos a la intimidad y al honor de las personas y a no ser injustamente discriminado.

En esta ley se señaló mucho que se trata de una protección de los derechos de las personas. No estamos hablando de la protección del crédito ni del derecho de informar de las instituciones o del funcionamiento libre del mercado. Esto no es la protección de las agencias de información sino de la persona. Algunos creen que el tema es al revés, que primero está el derecho de informar y en base a eso hay que defender a la persona. Es al revés. La ley, en base a la filosofía constitucional, protege los derechos de las personas. Por supuesto, también merece protección el derecho de comerciar, el derecho de la formación de archivos, pero tiene que haber un equilibrio entre ambos derechos. En caso de conflicto, tiene que prevalecer sin lugar a dudas el derecho de las personas.

Hago esta aclaración, que si mal no recuerdo también la hice cuando expuse el proyecto en su oportunidad: muchas veces se pone énfasis



en prohibir que figuren los datos sensibles. Me parece bien que sea así porque se usan, como aquí se ha dicho, para atacar a las personas. Pero no tiene menos valor el derecho a que se informe correctamente de la solvencia y situación patrimonial de una persona, porque el patrimonio es también un atributo de la persona. En muchas ocasiones se puede causar más daño difundiendo un dato falso, inexacto sobre la situación patrimonial de una persona que difundiendo un dato sensible. A una persona puede no causarle tanto daño que se diga a qué religión pertenece o qué religión profesa como que se informe que es un insolvente y se lo convierta en un muerto civil, porque no podrá acceder al crédito. Y lo pueden condenar, de esa forma, a un estado de miseria y de pobreza permanentes. Por eso no es menor la protección que se debe dar a la persona frente a las bases de datos tendientes a informar situaciones patrimoniales.

Hechas estas aclaraciones voy a manifestar, señor presidente, que este proyecto de ley necesariamente tenía que referirse a la cuestión de los archivos, a las bases de datos, porque es una forma de coadyuvar al derecho consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Admito que puede haber opiniones distintas en el sentido de que habría que haber regulado nada más que el hábeas data. Inclusive admito que algunos digan que, por ser operativo el artículo 43, no hace falta ninguna regulación. Con ese criterio no habría por qué haber regulado el amparo ni el hábeas corpus. Algunos olvidan que hay una ley sobre hábeas corpus que sancionó este mismo Congreso allá por el '84 u '85. Recuerdo unas célebres discusiones que teníamos con el hoy presidente Fernando de la Rúa, que era el autor de ese proyecto que se convirtió en ley. Discutíamos acerca de si el hábeas corpus procedía contra actos de particulares. Yo sostenía que sí y el doctor De la Rúa que no. Parte de la doctrina me da la razón a mí y otra parte de la doctrina le da la razón a él. Últimamente creo que se está imponiendo la primera interpretación, es decir que también corresponde contra actos de los particulares, lo que lamentablemente no está en el proyecto que sancionamos. Adelanto que voy a proponer un proyecto de ley actualizando la ley sobre hábeas corpus.

Dicho esto, señor presidente, llegamos a esta instancia en que tenemos que expedirnos sobre las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Como ya dije, no han sido muy felices las

modificaciones introducidas por la Cámara baja a nuestro proyecto. Y pienso que está mal desde el comienzo. Cuando modifican el artículo 1º desvirtúan el proyecto, porque le sacan una expresión que define la teleología de la ley, cual es su finalidad. Los diputados la sacan y dan una serie de pautas pero no dicen, como lo hace claramente la sanción del Senado, que tiene por objeto la protección integral de los datos asentados en archivos, registros, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información, etcétera.

La sanción de Diputados no dice nada de eso. Dice directamente que la presente ley tiene por objeto regular el uso y tratamiento de estos datos. O sea, se olvidan, eliminan en forma indebida el núcleo interpretativo de la ley, el objeto de la norma, que es la protección integral de los datos personales. Por eso nosotros insistimos en la sanción del artículo 1º.

Diputados agrega, yo diría en una sobreactuación, porque siempre se quiere quedar bien con el sector periodístico, que en ningún caso se podrán afectar las bases de datos ni las fuentes de información periodística. Eso está fuera de discusión. Los archivos periodísticos no son objeto de la regulación de esta norma, porque no están destinados a dar datos. Son para manejo del propio medio.

¿Para qué vamos a hablar de la fuente de información periodística? Es una sobreactuación. Es como querer quedar bien diciendo: "A ustedes siempre los tenemos en cuenta". ¿Pero si ya los tuvimos en cuenta cuando sancionamos la reforma de la Constitución de 1994! Ahí está el resguardo del secreto de la fuente de información periodística. En el artículo 40 de la norma también decimos que no se podrán afectar las fuentes de información periodística.

Está bien, el miembro informante ha dado una razón; yo la acepto. También lo ha dicho el distinguido colega por Córdoba. Pero creo que es totalmente sobreabundante. No hay forma de interpretar que la aplicación de esta ley puede afectar el secreto de la fuente de información periodística.

No me voy a referir a todos y cada uno de los puntos que ha modificado la Cámara de Diputados y sobre los que nosotros insistimos. El miembro informante ya ha dicho qué es lo que aceptamos. Estoy de acuerdo. Explicó en for-



ma muy clara y contundente, inclusive, por qué aceptamos la insistencia en el artículo 47, que no estaba contenido en mi proyecto de ley. Fue introducido en el recinto y me terminaron de convencer de que es posible y correcto incluirlo.

Quiero referirme a la interrupción que hice al senador Romero Feris. Realmente debemos haber leído proyectos distintos. El dice que la Cámara de Diputados ha simplificado la acción de hábeas data con relación a lo establecido por el Senado. Es absolutamente lo contrario. Fíjense que Diputados, al regular la acción propiamente dicha de hábeas data, habla de tres tipos de acciones que el interesado, el titular de los datos, puede utilizar. Cito: acciones especiales de hábeas data; acciones de conocimiento, acción de prevención y acción de reparación. ¿Para qué esta distinción de distintos tipos, si la acción es una sola? Al plantear la demanda, el interesado dirá: "Es para que se rectifique el dato; es para actualizarlo; es por la confidencialidad; es para que se eliminen los datos sensibles". ¿Qué objeto tiene el estar discriminando las acciones, si ya conocemos los problemas que siempre tuvimos los abogados para determinar qué acción es la que corresponde? Muchas veces se pierden juicios por no elegir bien cuál es la acción. Si bien se dice que pueden ser acumuladas, yo digo para qué determinar qué tipo de acción, complicando la ley. La acción es una sola, así como lo es el amparo. ¿O alguien ha visto que hay amparo para la restricción de derecho y otro para la violación de derecho? No, hay una sola acción. Y recordemos las enseñanzas de Couture —el famoso, célebre procesalista del cual estudiamos tanto, que hablaba de la unicidad de la acción—, que decía siempre que la acción es una sola.

Por eso creo que la sanción de Diputados lo único que hace es complicar el aspecto procesal. Me permito discrepar con la posición del señor senador por San Luis en cuanto hace al trámite procesal. Se le ha dado el trámite más rápido posible: cinco días para contestar el informe, tres días para ampliar. Además, se aplican las disposiciones del juicio sumarísimo. Si esto no se regulara, se tramitaría como un amparo y yo creo que esta acción, por sus características, debería tener inclusive menos requisitos que la acción de amparo, porque se trata de un objeto mucho más específico, más preciso y que requeriría en ese caso una acción realmente rápida, sencilla, como dice el Pacto de

San José de Costa Rica, que habla de este derecho con una acción sencilla y rápida. El tema de la rapidez está perfectamente contemplado. No voy a entrar en aquella discusión de si la acción de hábeas data es una especie de amparo, es un subamparo, si tiene la misma o distinta naturaleza. Hay una acción de hábeas data que la estamos regulando, que tiene su fundamento en la Constitución Nacional, que le damos un trámite distinto y creo que de esta forma vamos a dar una sanción adecuada como una garantía constitucional en una ley que además regula debidamente, como lo hacen otras leyes en el derecho comparado conjuntamente, el tema de la organización de los registros y la forma en que el titular de los datos puede acceder a esos registros y puede conseguir las rectificaciones y supresiones que corresponda.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Genoud.

**Sr. Menem.** — Por ese motivo, señor presidente, escuchando que hay murmullos en la sala, como decían antes los presidentes cuando presidían las sesiones de las Cámaras —seguramente porque hay apuro en votar esta ley y también habrá mucho interés por escuchar al jefe de Gabinete—, voy a pedir la inserción, una por una, de las posiciones respecto a los casos en que insistimos o que aceptamos las modificaciones de la Cámara de Diputados.

Debemos votar esta ley, tal como ha pedido el miembro informante, porque creo que de esta forma agregamos un arma más al arsenal de la democracia respecto de las garantías que son indispensables para la protección de los derechos consagrados por nuestra Constitución.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Villarroel, del Frente Cívico por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente, colegas: voy a ser telegráfico, no precisamente por los murmullos de la sala sino porque quiero ahorrar palabras que no serían sino reiteración de otras que ya se han dicho en anteriores oportunidades. Bien ha manifestado el señor senador por La Rioja que han sido tres con ésta las veces que él se aboca a este asunto.

Yo diría que no es cierto que estemos en deuda respecto a este tema; más bien, en todo caso, hay otros que están en deuda con el Senado, aunque últimamente no tenga muy buena pren-



sa reivindicar la tarea del Senado. Porque lo cierto es que acá la última vez que se debatió esto fue el 26 de noviembre de 1998. En esa oportunidad hubo no menos de unos siete u ocho proyectos diferentes sobre ley de hábeas data y algunas disidencias que fueron formando complementos del así llamado orden del día principal, que lo era el número 1006, de octubre de ese año 98. El complemento número 1 —y no es porque lo ponga al frente, de gusto nomás, sino porque ese es el orden— eran las disidencias de mi parte, que eran no sólo en general sino en particular, con una crítica pormenorizada del articulado del proyecto, que básicamente era el que recogía el proyecto del doctor Menem. Y había complementos 2, 3 y 4, que recogían disidencias de varios senadores de la Unión Cívica Radical, además de los proyectos que había de los senadores Romero Feris y Aguirre Lanari.

O sea que el Senado ha trabajado de modo bastante acucioso en el asunto, lo que debe ser reivindicado más allá de las diferencias.

Yo participo de algunas de las críticas que aquí ha expuesto el señor senador por San Luis doctor Rodríguez Saá, principalmente porque me hubiera parecido mejor —digo esto sin ser tan drástico como ha sido él en la crítica— que se hubiese hecho un régimen circunscripto al andamio de la garantías, vale decir las normas necesarias para dar andamio a las garantías, dejando para un régimen aparte una cuestión que es bastante compleja y engorrosa, como obviamente es en rigor el negocio de la venta de datos. Pero se ha obrado de otra manera.

Además —en esto disiento con el señor senador por San Luis—, no es que este régimen legal legalice a esas organizaciones que venden datos sino que simplemente trata de normarlas con mayor o menor fortuna, porque de hecho esa actividad existe y es lícita desde el momento que son entidades privadas y ya sabemos que todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido.

En tren de cumplir con lo prometido, simplemente voy a decir que apoyo en general el proyecto y que en particular mantengo las disidencias que han sido puntualmente explicadas en el complemento 1 del orden del día 1006, tratado en este Senado en 1998, que supongo va a formar parte del Diario de Sesiones una vez que se ponga al día —espero que sea pronto—, razón por la cual voy a pedir una inserción.

Con estas palabras, doy por terminada mi intervención.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador López.

**Sr. López.** — Señor presidente: en oportunidad del tratamiento de este tema en noviembre de 1998 fui miembro informante de esta banca del proyecto que hoy viene en revisión.

Con la aclaración de que en muchísimos aspectos la sanción de la Cámara de Senadores es superior a la que está en tratamiento y el procedimiento constitucional de sanción de las leyes nos mete en una encerrona al tener que insistir o no, voy a pedir una inserción. Pero dejando a salvo que tengo mis observaciones con respecto al método que vamos a utilizar, sobre la aprobación de capítulos o artículos o de artículos dentro de capítulos con mayorías especiales, lo cual hace que la legislación pueda ser corregida por vetos parciales por el Poder Ejecutivo, con lo cual quizás pierdan coherencia las ideas originales tenidas en cuenta para armar la estructura de una ley.

En dicha inserción dejo complementado todo mi pensamiento respecto del tema que nos ocupa. Entonces, solicito la inserción atento al apuro en sancionar este proyecto y escuchar el informe del jefe de Gabinete de Ministros.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Atento a la importancia del tema de los proyectos de ley en revisión C.D.-70 y C.D.-74/2000, sobre normas para combatir la evasión tributaria y previsional y, teniendo en cuenta el contenido del dictamen de comisión, que fuera suscrito en disidencia parcial, y sin perjuicio de adelantar mi voto positivo en general, y en particular, resulta necesario, hacer referencia a los siguientes aspectos. Lo previsto en el capítulo I, artículo 1º, que establece que no surtirán efecto, o sea que le quite validez a los pagos de sumas de dinero mayores a pesos o dólares, diez mil y oportunamente de cinco mil con lo que estoy de acuerdo, y a pesar de que esta autorización otorgada al Poder Ejecutivo, no dudamos puede traer interpretaciones judiciales en observando esta ley por la falta de derogación expresa, de principios del Código Civil vigente, que consagra el respecto a la libertad de las partes en las contrataciones y el efecto cancelatorio del pago; sin perjuicio de que el inciso 5º autoriza al Poder Ejecutivo a establecer otros procedimientos, admitiendo reformar legislaciones de fondo, como lo son el Código Civil o del Código de Comercio, que son desaconsejables como técnica legislativa. Otro de los temas



que motivaron la disidencia, lo constituye el capítulo referido al cheque cancelatorio, como fue consignado en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y se mantiene en el dictamen de comisión que proponemos corregir en el texto a sancionar para que se elimine la palabra, venta que presupone un costo, y además ampliar la posibilidad de liberar la cantidad de endosos, la que la certificación pueda hacerse por parte de banco o entidad financiera. Con respecto al capítulo, del sistema de medición de producción primaria, y atento a que la actual gestión de gobierno, ha priorizado a las pymes, sancionando leyes que contemplan entre otros la creación de fondos de desarrollo fonapyme de garantía recíprocas, fogapyme, entre otros para impulsar su fomento y desarrollo; la modificación de la de Carta Orgánica del Banco Nación recientemente sancionadas, para posibilitar su urgente salida de la crisis, por lo que creemos hubiera sido aconsejable, que el contenido del artículo 13 del dictamen, excluyera expresamente o hubiera previsto que la autoridad de aplicación, tendría la obligación de sancionar un régimen de excepción para pequeños productores o emprendimientos de estructura familiar, aconsejando sancionar al mismo como obligatorio y no facultativo. Con relación al proyecto C.D.-12/2000 en revisión, declarando en emergencia económico-financiera al Estado nacional, teniendo en cuenta el estado de tratamiento y por razones de economía parlamentaria, en base al consenso que surge del dictamen de comisión que he suscrito, solicito la presente inserción. Con relación a la necesidad de consagrar en esta ley la declaración de emergencia, consideramos que es necesaria para que las decisiones que se tomen para su aplicación, le otorguen a las mismas, legitimidad y legalidad constitucional. Al referirme al capítulo de los contratos, del sector público nacional, consideramos que debe tenerse en cuenta que el tema es competencia del Poder Ejecutivo nacional, y como este dictamen no modifica el artículo segundo del proyecto venido en revisión, salvo en lo referido a prestaciones dentro de los marcos regulatorios establecidos por ley, es aconsejable aprobarlo. Quiero referirme puntualmente al capítulo de la relación del empleo público, y expresar que teniendo en cuenta que el mismo trata de la reubicación del personal, dependiente en general del Estado nacional, el dictamen obliga a respetar algunos principios, al establecer entre otros, plazos para la reasignación y reubicación del personal, establecer una fecha desde cuando no se podrán modificar las relaciones laborales, etcétera, pero por tratarse esta de una ley de emergencia, acompañaré su aprobación. Atento a que la redacción del capítulo referido a la constitución de las deudas, ha contemplado remisión a los sistemas establecidos en las leyes 23.696 y la 23.982, sus actualizaciones y decretos, aplicadas como consecuencia de la Ley de Convertibilidad aún vigente, resulta apropiada su aprobación haciendo referencia a que el proyecto de la Cámara de Diputados ha contemplado los

recursos de la comunidad, excluyendo de la consolidación las obligaciones del Instituto Nacional de Reaseguro y las provisionales con origen en el régimen general provisto en la ley 25.237, agregando las de la ley 23.982, que aún no hubiese recibido los bonos. Nadie puede desconocer el estado de indefensión en que se encuentran las finanzas públicas, no sólo del Estado nacional, sino además de los estados provinciales y municipales; no obstante al pretender el dictamen en el capítulo del Fondo de Saneamiento de Deudas Públicas y Municipales, introducir algunos aspectos que comprometen o permiten modificar las relaciones presupuestarias entre los estados provinciales en forma arbitraria, adelanto mi oposición a la aprobación de las modificaciones introducidas en el dictamen.

**Sr. Presidente (Genoud).** – Tiene la palabra el señor senador Alasino.

**Sr. Alasino.** – Señor presidente: tenemos una nueva oportunidad de tratar uno de los temas clave del proceso de democratización del país, es decir el proyecto de ley en revisión que nos ocupa, sobre hábeas data, consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 43.

Debo decir que esto tiene su origen, sin ninguna duda, en el sistema de supranacionalidad que la Constitución Nacional de Santa Fe-Paraná incorporó cuando le dio rango constitucional a las normas de los pactos internacionales sobre derechos humanos, específicamente el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que automáticamente implicó la operatividad inmediata de todos los derechos reconocidos y de las garantías consagradas para su defensa.

También debo decir, para no repetir conceptos que se han expresado con toda precisión, que el hábeas data en alguna medida apunta a la libertad de información, que se entiende como derecho a informar y como deber de informar, y que se traduce, según los términos del Pacto de San José de Costa Rica, en que la información debe ser abierta, pública, accesible y, especialmente, veraz. Y tal como está establecido en la Constitución, obviamente tiene que estar vinculada sin ninguna duda, en el fondo de la cuestión, al tema del hábeas data y específicamente a los bancos de datos.

Voy a pasar por alto las cuestiones técnicas y me voy a limitar, simplemente, a hacer algunas consideraciones respecto de ciertos aspectos que entiendo están absolutamente cambiados en el proyecto que viene de Diputados; y según nos ha anunciado el presidente de la co-



misión, a los efectos de que la Alianza nos acompañe, debemos votar condicionados algunos artículos.

Específicamente, hablaré en general del artículo 1º y de la confusión que trae la norma que viene de Diputados, cuando el párrafo que supuestamente vamos a incorporar dice que no estarán alcanzadas por la ley la base de datos ni la fuente de información periodística.

Por lo que yo entiendo, el último párrafo del artículo 43, que protege la fuente, en manera alguna puede estar relacionado directamente con la base de datos que puede tener una empresa periodística. Por ejemplo, si una base de datos de un diario importante dice que una persona tiene cuatro registros de automotor y se prueba que tiene uno, el diario puede decir toda la vida que tiene cuatro registros porque eso dice su base de datos y no se le puede pedir que la corrija. Si la base de datos de una empresa periodística dice que una persona tiene 10 millones de dólares de capital y se prueba que la persona tiene un millón, la base de datos de la empresa periodística no podrá corregirse, porque la ley la asimila a la fuente de información.

Me parece que una cosa es la base de datos y otra cosa es la fuente de información periodística. Una, hace a la libertad de expresión o de prensa y la otra, hace a la libertad de la empresa, que protege de esa forma difundir permanentemente, tal vez, datos falsos que nadie tiene el derecho a corregir.

Sin embargo, creo que la incorporación de este párrafo suelto al texto de la iniciativa va a entrar en colisión inmediata con el artículo 33 de la misma norma, que es el que dice cuándo procede la acción: si procede cuando se presume la falsedad, inexactitud y desactualización de la información de que se trata, si esta es la procedencia de la acción, entonces va de contrapelo con una base de datos falsa que puede repetir incesante y alegremente el error, sin que de alguna manera alguien tenga derecho a que finalmente allí se diga la verdad.

Creo que confundir la base de datos, que es una cuestión física y material, que es el recipiente en donde se acumula información, con la fuente de información periodística es un grave error que estamos por cometer.

Si los diputados lo hicieron y el Senado cuando discutió el tema en comisión advirtió el error nos encontramos en esta

especie de chantaje donde la norma se vota así o no se vota; si esto, como decía al principio, tiene su origen en la democratización del país y su respuesta en la decisión argentina de incorporar su transnacionalidad a sus normas, sin ningún lugar a dudas considero que en este aspecto estamos retrocediendo.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Senador Alasino: le solicitan una interrupción los señores senadores Molinari Romero y Yoma. Usted verá...

**Sr. Alasino.** — Cómo no, señor presidente.

Concedo la interrupción a los dos senadores, en el orden que a usted le parezca, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Gracias, señor presidente.

He solicitado una interrupción para expresar solamente una curiosidad.

El senador Alasino se refirió a esta votación como en un estado similar al del chantaje. Al respecto, yo quisiera saber de dónde proveniría ese chantaje. Realmente me queda una gran duda ante la gravedad de la afirmación que está haciendo el señor senador Alasino.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — ¿Va a responder las dos interrupciones juntas o por separado, senador Alasino?

**Sr. Alasino.** — Las dos juntas, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Bien.

Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Primero, señor presidente —y con todo respeto por mi colega de bancada y de bloque—, de ninguna manera puedo aceptar que hubo chantaje por parte de ningún legislador ni grupo de presión en el tratamiento de este proyecto de ley.

Es más; creo que si hay algo de lo que me enorgullezco es de que este tipo de normas que reglamentan cláusulas constitucionales expresas siempre lograron el consenso de la Comisión de Asuntos Constitucionales. A veces hemos tenido que ceder o conceder, pero las leyes reglamentarias de la Constitución, por lo menos las que sancionó este Senado, han sido producto del consenso; absolutamente todas.



Por otra parte, en el caso específico de este artículo 1º, lo que pasa es que la interpretación –respetable, por supuesto– del senador Alasino difiere de la interpretación de la mayoría de la comisión; por lo menos, de la de sus miembros justicialistas, y, obviamente, creo que también de los de la Alianza.

Digo esto porque para nosotros la base de datos y las fuentes de información periodística son lo mismo. Digámoslo de esta manera: las bases de datos integran las fuentes de información periodística. El senador Alasino dice que son dos cosas distintas; ahí está quizá la diferencia. Su opinión es respetable, pero no ha sido compartida por la mayoría de la comisión.

Nosotros creemos que el espíritu de esta ley –lo dije yo; también lo ratificó el señor senador Menem en su exposición y lo manifestaron algunos otros senadores– tiene que ver con lo que dice su artículo 1º. Pero la Cámara de Diputados lo dice de manera incorrecta y sobreabundante. Esta ley lo que hace es diferenciar algo que no es diferenciable. Esta ley diferencia las bases de datos de la fuente de información periodística.

Por otra parte, lo que esta ley regula son las bases de datos destinadas a dar informes; y ése no es el caso de la base de datos de la fuente de información periodística.

Nosotros no tenemos problemas en acompañar el pedido de la bancada de la Alianza. Pero debemos decir que si bien respeta el espíritu de la ley, es pésimo desde el punto de vista de la técnica legislativa, sobreabundante y sobreactuante inclusive por parte de quienes lo impulsaron en la Cámara de Diputados.

Además, señor presidente, debemos tener en cuenta una cuestión práctica: para insistir en el artículo 1º del Senado necesitamos dos tercios. Como no lo vamos a reunir sin el consenso de la Alianza y la Alianza ya anticipó que no lo va a otorgar, de hecho quedará confirmada la sanción de Diputados. Entonces, para qué entablar una discusión en un tema respecto del cual la mayoría interpreta –dejo a salvo, reitero, la posición respetable del senador Alasino– que es el espíritu de la norma que estamos tratando.

Gracias, señor senador.

**Sr. Presidente (Genoud).** – Tiene la palabra el señor senador Alasino.

**Sr. Alasino.** – Al señor senador Molinari Romero le dejo que le responda la Constitución.

Al senador Yoma, debo decirle que esto no es lo que pasó en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la reunión ocurrió lo contrario. De allí surge el dictamen que se trajo a votación, donde solamente se acepta la modificación y se mantiene lo que al respecto había definido el proyecto del Senado. No es así. Ahora nos encontramos con esta especie de chantaje. ¿Por qué digo esto? Porque al final de su exposición el senador Yoma sostiene que si no votamos de esa forma no habrá dos tercios. Lo que estoy intentando es llamar a la reflexión porque el bloque Justicialista, sin duda, tiene un pensamiento muy cercano a lo que estoy diciendo. Todos los miembros del bloque, en la reunión que convocó el presidente de la comisión, suscribimos el dictamen, y ahora llamo a la reflexión al bloque de la Alianza para ver si conseguimos los dos tercios necesarios para votar este artículo tal como está redactado originalmente por el Senado. Esta es mi intención.

Si no resulta claro lo que estoy diciendo, reitero que la Constitución dice en el anteúltimo párrafo del artículo 43 que toda persona puede interponer acción contra bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes en el caso de falsedad o discriminación. Y no establece de qué empresa se trata: si es farmacéutica, periodística o de calzados, sino que habla de todas las empresas privadas. Y, aparte, establece una excepción para la fuente de información periodística, estableciendo que no es lo mismo y fijando una protección. Estamos desvirtuando la razón misma de ser del periodismo, avanzamos y seguimos confundiendo. Ahora que podemos distinguir, separar y establecer diferencias, no lo hacemos y nos rendimos. ¿Por qué nos rendimos? Porque –y pido que se me permita esta licencia– hay una especie de chantaje, según el cual se vota como viene de la Cámara de Diputados o no se prestan los votos necesarios y, entonces, queda tal como vino de esa Cámara.

Evidentemente, comparto la encendida defensa que en la Comisión de Asuntos Constitucionales hicieron de este artículo el presidente de la comisión y los otros senadores –inclusive, los de la oposición– que por lo menos allí manifestaron este tema como se presenta hoy aquí en el recinto.

Este es el meollo y la cocoa –uno le echa más cocoa para que el chocolate quede más oscuro–. No avanzo en los otros temas, pero



quiero dejar perfectamente en claro que la Constitución protege sólo las fuentes de información y los bancos de datos pueden ser fuente de información o no. Y, a veces, los bancos de datos más que de información son fuente de elementos que quedan allí y que, después, cuando el periódico tiene que acudir por la "A", Alasino, va a la información que esté allí, sea cierta o mentira, y uno nunca la puede corregir. Ese no es el espíritu de la Constitución.

El señor senador Yoma me solicita otra interrupción, que se la concedo.

**Sr. Presidente (Genoud).** – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Agradezco al señor senador que me permita esta interrupción.

Voy a señalar dos cosas. En primer lugar, quiero decir que disiento en cuanto a que este artículo sea el meollo de la discusión, sino todo lo contrario. Este artículo ha sido el que menos discusión tuvo como tal, a no ser por la presencia de ADEPA, que concurrió a la comisión a exponer sobre este tema. Los que impulsan la sanción de esta iniciativa son las asociaciones de usuarios y consumidores, que representan a millones de argentinos que están esperando esto para el acceso al crédito. Este es el profundo sentido social que tiene este proyecto de ley. Lo otro forma parte de una discusión doctrinaria, que es muy respetable y que se dio en la Convención Constituyente. Más aún, cada vez que se tocaba el tema de la fuente de información periodística –y esto lo va a reconocer el señor senador Alasino– había al comienzo, inmediatamente de sancionada la reforma constitucional, una corriente doctrinaria que decía que las fuentes de información periodística que preservaba la Constitución estaban referidas únicamente a los efectos del hábeas data.

Es decir que restringían la interpretación constitucional a la preservación de las fuentes de información periodística al solo efecto del hábeas data.

Quizás a esta parte de la doctrina es a la que quiere –muy respetablemente, porque muchos juristas se expresaron de esa forma al momento de la sanción de la Constitución– el señor senador Alasino.

Lo que sucede es que esa interpretación restrictiva respecto de la fuente de información periodística ha cedido –en doctrina y en jurisprudencia– a una interpretación más amplia y que, que excede al hábeas data.

Por otra parte, ¿cómo podemos escindir el banco de datos de una fuente de información periodística –que no está destinado a dar informes– de la fuente de información?

O, mejor dicho, ¿ustedes creen que si ingresamos en la base de datos es posible no conocer la fuente de información?

Si uno ingresa en la base de datos, inmediatamente accede al origen y a la fuente de información periodística. Es imposible escindir la base de datos de la fuente de información periodística.

Esta ley es taxativa. No regula las bases de datos que no estén destinadas a dar informes.

Quizás sea correcto lo que dice el señor senador Alasino, pero en base a otra ley y a otra interpretación constitucional. En esta ley, el artículo 1° votado por el Senado establece la regulación de las bases de datos destinadas a dar informes, lo que no es el caso de las fuentes de información periodística, porque no están destinadas a dar informes.

La única forma de disentir con el senador Alasino sería en una discusión de fondo acerca de cuál es la naturaleza de la ley que estamos considerando.

Por último, señor presidente, no es la primera vez que de un dictamen de comisión enviado al recinto hay propuestas de modificación por parte de los señores legisladores. Y no se viola ninguna regla del reglamento ni nada que se le parezca.

Del debate en comisión al recinto es obvio que puede haber legisladores que incorporen sugerencias o propuestas. Este accionar siempre ha sido contemplado y las modificaciones son aceptadas o no en el recinto.

Por eso reitero que quizás esta discusión se debería haber dado. O quizás se dio y se agotó al momento de la sanción del artículo 43 de la Constitución.

**Sr. Presidente (Genoud).** – Continúa en uso de la palabra el señor senador Alasino.

**Sr. Alasino.** – Señor presidente: esto parece un diálogo de sordos, no sé de qué ley estamos hablando.

Si el artículo 1° dice: "La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las per-



sonas", no sé cómo puede decir el senador Yoma que esta ley es solamente para sacar créditos. O que esto tiene que ver solamente con los derechos de los usuarios y los consumidores. Con todo respeto, es una tontería.

Esta ley regula una parte del derecho a la información. El artículo 42 dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz.

Y resulta que nosotros estamos votando una ley a contrapelo del 42, diciendo que puede existir —y no se puede cambiar— un registro privado que está relacionado con la intimidad y el honor de las personas. O sea que si está equivocado, no se lo puede corregir. ¿Por qué? Porque es una empresa periodística.

Esto no tiene nada que ver con la fuente de información, que es el especialísimo secreto profesional del periodista.

La Constitución, respecto del tema del secreto profesional del periodista, fue mucho más allá.

Y así como el secreto profesional lo puede revelar el juez, cuando hay algún interés superior para proteger, aparentemente la Constitución aun va más lejos y no deja forma de que el periodista pueda revelar su fuente.

Pero digo aparentemente, porque supongamos que a un periodista le avisan que van a poner una bomba en una embajada, que le dicen quién es y la bomba explota. Yo no sé si un juez no lo puede revelar después, para buscar al culpable de la bomba. No sé si aun en ese caso la Constitución o un juez no deben ceder, frente a la gravedad del hecho y frente a esa aparente situación absoluta del periodista. Lo señalo como un ejercicio teórico.

Por eso, señor presidente —no me quiero extender sobre el tema—, insisto en que el artículo 1º debe ser el original del dictamen del Senado. No estoy de acuerdo en que se incorpore el párrafo que trae la sanción de la Cámara de Diputados y que hace esta discriminación. De todos modos, considero que de quedar así, realmente tenemos el remedio de la inconstitucionalidad, no solamente en virtud del artículo 42 sino porque además este proyecto de ley, que tiene por objeto proteger la intimidad y el honor de las personas —entre otras cosas—, va a dejar un compartimiento estanco donde la intimidad y el honor no podrán tener protección.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Yoma. En realidad, sería

para una interrupción, porque está primero el señor senador Villaverde...

**Sr. Villaverde.** — Se la concedo, señor presidente.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: tan fuerte es el espíritu del proyecto de ley en cuanto a dejar de lado o excluir de los alcances de este proyecto a las fuentes de información periodística, que en el artículo 40 de la sanción del Senado —que también estamos considerando hoy— se dice que los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere, salvo en el caso en que se afecten las fuentes de información periodística. Por eso decimos, señor presidente...

**Sr. Alasino.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Presidente (Genoud).** — Sería una interrupción de una interrupción. ¿Se la concede, senador?

**Sr. Yoma.** — Sí

**Sr. Villaverde.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: la ley habla de confidencialidad, que no es lo que dice el artículo 1º. La confidencialidad tiene, en cualquier lado en que se estudie, un régimen que la ampara distinto al secreto absoluto de las fuentes de información periodística. La confidencialidad está vinculada a la difusión o al tratamiento reservado del tema. Pero no a la reserva absoluta que puede tener una persona del origen de una información. Y esto, en mi opinión, en este proyecto de ley es admisible. Pero no tiene nada que ver con la norma de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Villaverde.

**Sr. Villaverde.** — Señor presidente: voy a solicitar la inserción de algunas observaciones que iba a plantear, en homenaje a la brevedad y a los efectos de no entrar quizás a polemizar también con otros senadores, ni a reiterar algunos argumentos ya vertidos que comparto.

Considero que el procedimiento de hábeas data, al igual que el amparo, debe ser concreto, preciso y lo más breve posible. Pero acá se están incorporando dos institutos. Uno referido al almacenamiento y registro de datos y otro al procedimiento del hábeas data.

También comparto, no sólo con el autor del proyecto original sino que me remito a los fun-



damentos de un proyecto de mi autoría que están incorporados, la necesidad de cumplir con la Constitución, con la cual estamos en falta desde 1994.

Por lo tanto, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de estas observaciones.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Estamos cumpliendo con un mandato constitucional conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994.

A tal efecto, agregaré algunas consideraciones a los fundamentos expuestos en el proyecto de mi autoría, conforme consta en el orden del día que estamos considerando.

Hábeas data, significa que “tengas posesión”, por lo tanto si hábeas corpus es “traer el cuerpo”, hábeas data es “traer el dato”.

El hábeas data es una garantía constitucional en defensa del hombre afectado en su dignidad, no garantiza el derecho a la información, que encuentra su protección por la vía del amparo; garantiza la dignidad de las personas, su prestigio, su moral, su honor, afectados por informaciones ocultas, almacenadas a veces por error o malicia en los registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.

El procedimiento de hábeas data, semejante al procedimiento de amparo, debe ser claro, efectivo, de fácil lectura, lo más preciso y corto posible.

A partir de la década del 70, en los países nórdicos y sucesivamente en el resto de Europa, comenzó a reglamentarse por ley qué datos y en qué forma debían recopilarse por quienes estaban legalmente en condiciones de conocer los mismos. Se difundió así la regularización del almacenamiento de datos, pero esto no es la garantía de hábeas data. El almacenamiento de datos y la garantía constitucional de hábeas data corren por distintos andariveles.

El proyecto que viene de Diputados trata ambas cosas en forma confusa y difusa. Regula la compilación de datos en forma extensa, no lo suficientemente clara, y lo trata en relación directa con la garantía de hábeas data, sin la suficiente diferenciación.

En mi criterio, este proyecto se puede desglosar en dos leyes perfectamente diferenciadas: una que trata sobre los datos, las formas y condiciones de su compilación e información, y la otra que se refiere a la garantía de hábeas data, que tiende a preservar la dignidad de las personas afectadas por informaciones manipuladas en archivos o bancos de datos del Estado o particulares. Tal como viene el proyecto de hábeas data sería igual que presidir un proyecto de hábeas data, con el derecho y las condiciones porlijamente enumeradas que podrían dar lugar a la acción de hábeas corpus.

Una ley anterior sancionada en este Congreso sobre hábeas data fue vetada por el Ejecutivo y postergó durante dos años el tratamiento de la nueva ley que nos ha llegado de Diputados ahora, con el mismo error de pretender regular por un lado el registro de datos y conjuntamente la garantía de hábeas data. La ley vetada provocó serias observaciones de los distintos organismos del Estado y particulares que compilan los datos, que de reiterarse nuevamente se corre el riesgo de quedarnos sin ley de garantía de hábeas data, conforme lo planteé oportunamente.

Y a tal efecto en el proyecto de mi autoría propongo un procedimiento previo que acredite la negativa del demandado para evitar poner en movimiento la instancia judicial en los casos en que los requerimientos fueran atendidos satisfactoriamente.

En cuanto al procedimiento judicial propongo algunas pautas que entiendo necesarias, remitidas en general al procedimiento de amparo.

Además debemos advertir que el tema de la regulación, compilación y publicación de los datos puede sufrir variadas y discutidas modificaciones, siendo en cambio duradera una ley de hábeas data que en forma clara, precisa y breve regule la garantía constitucional.

Por todo lo expuesto solicito la vuelta a comisión para que se ponga a consideración de este Senado en forma breve, clara y precisa una ley de hábeas data exclusivamente, sin el proyecto que trate la forma y condiciones en que se deben compilar datos para ponerlos a disposición de los que requieran esa información.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los pedidos de inserción formulados por los señores senadores a lo largo del debate.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Se procederá en consecuencia.<sup>1</sup>

Corresponde pasar a la votación...

**Sr. Maglietti.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: voy a ser muy breve dado que las circunstancias de este debate se han alargado más de lo previsto.

En primer lugar, quiero decir lo que Alberdi en algún momento escribió en las *Bases* y que consta en la página 247 de la edición que tengo en mi banca.

Decía lo siguiente: “No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.



conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades las anule o falsee con disposiciones reglamentarias".

Señor presidente: coincido en que este proyecto, en cierta medida, no es un proyecto de hábeas data sino una reglamentación de los archivos o bancos de datos, juntamente con la inclusión de lo establecido por la Constitución en el tema del hábeas data.

Por ello, creo que muchas de las críticas aquí formuladas se ajustan a la realidad. Pero no voy a repetir lo que ya se ha dicho.

Solamente quiero tocar breve y rápidamente dos puntos de los que considero importante que quede la respectiva constancia.

En primer lugar, al órgano que se crea por este proyecto se le han dado facultades de controlar y de exigir documentos, programas y otros elementos, de juzgar y sancionar, de reglamentar y hasta de querellar que, a mi criterio, son excesivas respecto de lo que debe ser objeto de normas reglamentarias, ya que al mismo tiempo que se le da este tipo de facultades nos encontramos con que también las tiene el Poder Ejecutivo para reglamentar la ley.

Puede considerarse, a mi criterio, que esto implica la violación de algunos principios constitucionales, tal el caso del artículo 76, que prohíbe la delegación legislativa, y lógicamente de otros principios respecto de los cuales no me voy a extender en este momento.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Señor senador: le solicita una interrupción el señor senador Rodríguez Saá. ¿La acepta?

**Sr. Maglietti**. — No, señor presidente, porque voy a ser muy breve.

**Sr. Presidente** (Genoud). — No se la concede, señor senador Rodríguez Saá.

Continúa en uso de la palabra el señor senador Maglietti.

**Sr. Maglietti**. — Además, este órgano controla, juzga y aplica sanciones. lo que evidentemente excede las facultades de un órgano de administración.

En segundo lugar, el otro punto que puede ser objeto de una crítica está vinculado a la reforma del Código Penal.

Se establecen sanciones penales dentro del título II del Código Penal en los delitos contra el honor, referidos a la calumnia y la injuria.

Sostengo, señor presidente, que evidentemente se ha incurrido en una modificación del Código Penal, concretamente en lo relacionado con el artículo 117 bis, que no era necesaria y que, al contrario, en lugar de aclarar la situación lo que provoca es una invasión de una jurisdicción que tendría que estar reservada a las modificaciones del Código Penal por parte de una comisión que estudie detalladamente este delito, el de calumnias e injurias.

En este caso, cuando se legisla ese delito, en realidad, hay que tener en cuenta que ya está legislado en el Código Penal y aquí no se hace más que modificar la figura en algunos aspectos que, a mi entender, no tienen ningún resultado feliz.

Por ejemplo, cuando dice que se inserte o se haga insertar maliciosamente datos falsos en un archivo, si el hecho constituye un delito, ya está legislado —es calumnia e injuria—; si no lo constituye, son datos inofensivos y no configuran delito.

Perdón por hacer esta disquisición muy apresurada, pero como entiendo la impaciencia reinante en el recinto para terminar con este asunto, concluyo agregando que, pese a no estar de acuerdo con algunos aspectos de este proyecto, voy a respetar el criterio de la mayoría y del miembro informante de esta bancada. De ahí que, a pesar de tener algunas disidencias, voy a votar en forma afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Arnold.

**Sr. Arnold**. — Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo en general. Pido que se inserten en el Diario de Sesiones las modificaciones que tengo redactadas para la discusión en particular.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Así se hará.<sup>1</sup>

Se va a votar el proyecto. No corresponde votarlo en general toda vez que fue aprobado por la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Diputados aprobó un texto por mayoría de dos tercios.

Por lo tanto, corresponde que se vote artículo por artículo, consignando la mayoría obtenida: simple o dos tercios, para determinar si prevalece la sanción del Senado o el texto de la Cámara de Diputados.

En consideración el artículo 1º.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.



Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: solicito que se insista en la redacción originaria del artículo 1º con la inclusión como último párrafo del siguiente texto: "En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas".

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: quisiera decir dos cosas. Primero quiero aclarar cuál es el sentido de la votación. Lo que se pone en consideración es la sanción del Senado que consta en el dictamen de comisión. Necesitamos los dos tercios para aprobar los artículos del dictamen de comisión, que es la sanción del Senado. En ese sentido, tal cual lo dijimos al informar el proyecto de ley, la comisión acepta la modificación que viene de la Cámara de Diputados en el artículo 1º.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el senador Alasino.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: me opongo a que se introduzca el párrafo que propuso el señor senador Molinari Romero.

Quiero intentar un último esfuerzo haciendo un ejercicio. Supongamos que del párrafo que quieren incorporar sacamos la parte que dice "ni las fuentes". Ese párrafo se refiere a dos cosas: los datos y las fuentes, como que son distintas —ni datos ni fuentes—. De esta manera el párrafo queda así: "En ningún caso se podrá afectar la base de datos de información periodística". Pido que observen la enormidad que estamos votando.

Creo que hay una confusión. Voy a tratar de realizar un ejercicio que se hace cuando se estudia la prueba en derecho procesal. Una cosa es el elemento de prueba, lo que se introduce al proceso, que es el dato, y otra cosa es el origen o el vehículo mediante el cual se trae el dato. Cuando se hace referencia a fuente de información, lo que está diciendo la ley afecta al agente que le dio la información y la confidencialidad se mantiene. No se puede decir. No ocurre lo mismo con el dato equivocado. Este es el error. El error es asimilar el elemento con el vehículo, cómo ingresa a conocimiento de alguien una información. Eso es el vehículo. La fuente es secreta. El dato si es erróneo puede ser corregido. De lo contrario queda la alternativa de que la Cámara de Diputados:

aunque sea un dato errado, en ningún caso podrá afectar la base de datos de una información periodística. Me parece una enormidad. En esas condiciones hago constar mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el senador Menem

**Sr. Menem.** — Señor presidente: simplemente quisiera establecer en forma clara cómo se vota. Insistimos en el artículo de la sanción del Senado tal como había sido sancionado por este cuerpo y se acepta como un agregado a este artículo la sanción de Diputados en lo que hace al secreto de la fuente de información periodística. Esto es la última parte del artículo 1º de la sanción de Diputados.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: ¿no se puede votar primero el dictamen original y, si no tiene mayoría, se le agrega el párrafo que introdujera la Cámara de Diputados? ¿Quién le dice que el artículo original del Senado obtiene mayoría de dos tercios? Y si no la tiene, se pone el párrafo que le van a agregar ahora al dictamen. Tenemos un dictamen de mayoría para votar, donde figura el artículo tal como estaba redactado. Y ahora hay un agregado. Creo que se debería votar primero ese dictamen, que es de mayoría, y después la modificación.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el presidente de la comisión.

**Sr. Yoma.** — Valoro el esfuerzo que está haciendo el senador Alasino para tratar de consensuar su postura doctrinaria o, en todo caso, ganar una votación. Pero creo que es un exceso pretender violentar la práctica parlamentaria de quince años, que consiste en someter a consideración de la comisión la modificación del dictamen o de un artículo, luego la comisión lo aprueba o no y, finalmente, se somete el artículo a votación. Repito que valoro el exceso, pero de ninguna manera es aceptable esa propuesta por inconducente y, además, improcedente.

De todos modos —es bueno precisar una vez más— la discusión está dada alrededor de si las bases de datos integran la fuente de información periodística o no. Este proyecto de ley dice que la integran, en todo su articulado. Diputados se equivoca al separar bases de datos de información, en un exceso, sobreabundancia o sobreactuación frente a un pedido de los sectores vinculados a la prensa.



Pero como el espíritu del proyecto es que no se puede preservar la fuente si no se lo hace también con la base de datos —esto es lo que dice la iniciativa sancionada por el Senado, inclusive por el senador Alasino—, no tenemos problemas en aceptar ese agregado innecesario que hizo la Cámara de Diputados, para contribuir a este consenso. De ninguna manera vamos a conceder, señor presidente, que se altere absolutamente el reglamento o las prácticas para el tratamiento de los temas por lo que ya, a esta altura, constituye un capricho del senador Alasino.

**Sr. Presidente** (Genoud). — La Presidencia va a someter a votación la moción que explicitara el senador Menem, que acaba de fundamentar nuevamente el presidente de la comisión y que acepta el bloque de la Alianza.

Tiene la palabra el senador Alasino.

**Sr. Alasino.** — Creo que es cierto lo que dice el senador Yoma, que el presidente habitualmente, en este Senado, representa a la comisión. Esto sirve para el senador Yoma y para todas las comisiones. Porque hace muy pocos días discutimos en este recinto —donde aparentemente todos asienten este sistema al que hace referencia el senador Yoma porque van a votar así—, con respecto a otro dictamen, se dijo de la misma forma y generó sospechas. Este ha sido el mecanismo según el cual el presidente de la comisión es como si fuera la comisión. Y el presidente de la comisión, de alguna manera, lleva adelante el dictamen, hace su estudio y lo hace firmar. Digo esto porque —repito— hace pocos días tuvimos otro dictamen en discusión y se usó este sistema.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Si me permite, senador...

**Sr. Alasino.** — No, déjeme terminar, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Está haciendo una interpretación que no es exacta.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: creo que es así. Esto es así. Si no, la comisión debe aceptar. Y en la comisión somos quince miembros.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Se le cede la palabra al presidente de la comisión, que es el vocero o el miembro informante del dictamen de la mayoría. Si hay un dictamen de la minoría...

**Sr. Alasino.** — Entonces, convengamos, señor presidente, que no es la comisión.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Alasino.** — Respecto del otro dictamen no hubo ningún problema y todos se rasgaron las vestiduras alertando que había un presidente que había hecho lo de siempre.

Siempre se hace esto. Esta es la historia de cómo se hicieron los dictámenes de comisión en el Senado.

**Sr. Presidente** (Genoud). — El presidente no puede sustituir a un cuerpo colegiado. Lo que sucede es que actúa como vocero y miembro informante. Además, la práctica es que se somete a votación en primer lugar el dictamen de la mayoría, en este caso expresada por el presidente de la comisión.

Tiene la palabra el senador Losada.

**Sr. Losada.** — Señor presidente: simplemente, es para ratificar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar según la propuesta expresada por el senador Molinari Romero.

Por otra parte, creo que nadie más que el propio plenario sirve para ratificar la opinión del presidente de la comisión, que ha sido siempre quien definía la postura de la comisión.

Creo que se debe votar de esta manera.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: es hasta por un problema práctico y de sentido común; el proyecto viene en segunda revisión; si el artículo que se va a votar no reúne la mayoría necesaria, queda confirmado lo que vino de Diputados, textualmente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º según el texto del Senado, con el agregado de la fuente de información, como se explicitó al momento de formularse la moción por el señor senador Molinari Romero. Se requiere mayoría de dos tercios.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Queda aprobado por mayoría de dos tercios.

—Se enuncian y aprueban los artículos 2º y 3º.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Quedan aprobados por unanimidad.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: no voté afirmativamente los dos últimos artículos,



reco que el senador Varizat tampoco. Por eso comprendo lo de "unanimidad".

**Sr. Presidente** (Genoud). — A la Presidenta le pareció que era por unanimidad. Hace un mes en consignar su voto negativo. Quedan entonces registrados los votos negativos en los artículos 2º y 3º de los senadores Varizat, Rodríguez Saá y Romero Feris.

En el futuro, voy a decir "más de dos tercios" o "dos tercios" y no "unanimidad", para evitar equívocos.

Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: es al solo efecto de pedir una aclaración al senador Rodríguez Saá. ¿El vota en contra de todo el articulado o sólo de estos últimos dos artículos?

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Quiero expresar mi inconformidad hacia una ley que es un retroceso respecto de la Constitución y de los pactos internacionales. Por eso voto todos los artículos del proyecto en forma negativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Queda entonces consignada la opinión para todos los artículos que se voten en el futuro tanto del senador Rodríguez Saá como del senador Varizat.

—Se enuncia y aprueba el artículo 4º.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Queda aprobado por mayoría de dos tercios.

—Se enuncia el artículo 5º.

**Sr. Molinari Romero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: es solamente para solicitar que se acepten las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados en el apartado 1 y en los incisos b) y c) del apartado 2.

**Sr. Yoma.** — Que se lea, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Se va a leer por Secretaría.

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). — (Lee) "Artículo 5º. — (Consentimiento) 1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equi-

pare, de acuerdo a las circunstancias.

"El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 6º de la presente ley."

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: voy a apoyar también el inciso c) del apartado 2, en la insistencia, dado que es un requerimiento que había hecho la comisión para que se elimine el número telefónico como dato del cual no se requiera el consentimiento del titular para su tratamiento. Con lo cual se le requerirá el consentimiento al titular para suministrar del archivo de datos la información del número telefónico.

Esta modificación también fue propuesta por la Unión Cívica Radical. Así que en ese sentido la voy a acompañar.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: voto por la negativa este artículo, porque me parecen demasiado amplias las excepciones y ya lo señalé cuando se trató la primera vez en el Senado.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Se consigna el voto negativo del señor senador Villarroel.

Por Secretaría se leerán los incisos b) y c).

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). — (Lee) "b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal"...

**Sr. Yoma.** — Para que se entienda, hay que comenzar leyendo el encabezamiento del artículo.

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). — (Lee) "2. No será necesario el consentimiento cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto". Ese no se modifica. "b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio".

**Sr. Presidente** (Genoud). — Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — El artículo ha quedado aprobado por mayoría de dos tercios.

**Sr. Yoma.** — ¿Me permite, señor presidente? Quería aclarar que la Cámara de Diputados lo



que hizo fue eliminar dentro de los datos el número de teléfono.

**Sr. Branda.** — A eso me refería, señor presidente, cuando hice la propuesta de aprobar el texto.

—Se enuncia y aprueba el artículo 6°.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Ha quedado aprobado por mayoría de dos tercios.

—Se enuncia el artículo 7°:

**Sr. Villarroel.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Ha quedado aprobado por mayoría de dos tercios.

—Se enuncia el artículo 8°.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: pido que se acepte la redacción de la Cámara de Diputados, que creemos que es la mejor lograda desde el punto de vista de técnica legislativa.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Pontaquarto).** — (Lee) "Artículo 8°. (Datos relativos a la salud). Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional".

**Sr. Yoma.** — La verdad es que no tiene ningún sentido la modificación, pero la aceptamos.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el senador Molinari Romero para darle sentido a su moción.

**Sr. Yoma.** — Si me permite, señor presidente, para que el senador Molinari Romero se pueda expresar en su explicación quiero decir que la función del Senado habla de hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas. La

Cámara de Diputados dice: establecimientos destinados a la salud, o algo similar.

Me parecen demasiado generosas con los diputados las palabras del senador Molinari Romero de que es mucho más prolija y correcta la redacción de la Cámara de Diputados. De ninguna manera. Esta es técnicamente superior, pero lo vamos a aceptar.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: el senador Yoma se olvida de los antecedentes que tiene como diputado.

Esto tiene que ver fundamentalmente con una descripción que hace la Cámara de Diputados sobre ciencias de la salud y no sobre ciencias médicas, lo que hace que la norma sea más comprensiva de todas las actividades que pueden tener acopio de información o de datos. Por eso solicitamos que se respete la redacción de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Tiene la palabra el señor senador Vaquir, presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública.

**Sr. Vaquir.** — Señor presidente: me parece que los conceptos médicos que ha vertido el señor senador Molinari Romero son una muy buena interpretación jurídica. Primero, porque los establecimientos ya no son sanitarios públicos o privados. Hay una tercera variante que es la de los establecimientos de autogestión, que son mixtos, y que no están incluidos en la norma. En este sentido, los diputados no estuvieron muy ilustrados.

Por otra parte, cuando se hace referencia a las ciencias, aseguro que las ciencias médicas abarcan todo aquello que sea salud. Incluso el concepto médico en muchos países es el odontológico, el bioquímico, etcétera. Entonces, daba lo mismo decir "médico".

No rescata para sí el concepto del secreto, no sólo del profesional sino también de los paramédicos y de los técnicos, que también tienen acceso a la base de datos, por lo cual también deberían haber quedado incluidos, porque no va a ser él quien vaya a buscar a la base de datos la historia clínica de un paciente con HIV sino que lo hará su asistente. Entonces, esto también tendría que haber sido incluido.

Por otra parte, no se usa más el concepto mental...

**Sr. Presidente (Genoud).** — Diríjase a la Presidencia, señor senador Vaquir...



**Sr. Vaquir.** – Discúlpeme.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Para evitar el diálogo.

**Sr. Vaquir.** – Lo que pasa es que los diputados siempre nos castigan y cada tanto los cuatro o cinco colegas queremos “poner algún botoncito médico”.

**Sr. Molinari Romero.** – ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Presidente** (Genoud). – Le pide una interrupción el señor senador Molinari Romero. ¿Se la concede?

**Sr. Vaquir.** – Cómo no.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** – Lo que el señor senador está criticando es exactamente la sanción que en su momento hizo la Cámara de Senadores. Por eso le pido que no me considere abogado defensor de los diputados porque –insisto– las observaciones que usted está haciendo corresponden a la sanción original del Senado. Me refiero a si están incluidos los paramédicos o no, al secreto profesional, al hospital público, a la autogestión, etcétera. Todo esto tiene que ver con la sanción original del Senado. Entonces, distingamos dónde están los errores:

**Sr. Presidente** (Genoud). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Vaquir.

**Sr. Vaquir.** – En primer lugar, deseo puntualizar al señor senador Molinari Romero que yo sería incapaz de adjudicar a un colega responsabilidades que no tiene. La responsabilidad de esto es mía. Públicamente lo acepto.

**Sr. Molinari Romero.** – A confesión de parte...

**Sr. Presidente** (Genoud). – No dialoguen, señores senadores.

**Sr. Vaquir.** – Digo que la responsabilidad es mía como presidente de la Comisión de Salud porque quizás debimos haber analizado este artículo.

Para terminar, cuando se refiere al estado físico o mental, en el concepto moderno de la Organización Mundial de la Salud se habla de psicofísico o psicosomático.

Cuando dice “bajo tratamiento que acudan”, debe decir “que consulten”.

Y al final, donde dice “respetando los principios del secreto profesional” debe decir “respetando estrictamente el secreto profesional”.

Me hago absoluto y único responsable de no haber hecho las correcciones a tiempo. No tiene nada que ver el señor senador Molinari Romero. Pero dado que se están haciendo consideraciones, que quede en claro que este cuerpo advirtió estas cuestiones.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º con las modificaciones propuestas por el señor senador Molinari Romero y aceptadas por el presidente de la comisión.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Queda aprobado por mayoría de dos tercios.

–Se enuncia el artículo 9º.

**Sr. Menem.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Señor presidente: pido a los colegas que tratemos de aceptar las modificaciones que realmente sean conducentes y positivas. ¿Por qué? Porque hay una unidad de pensamiento en la autoría de la iniciativa. En este caso, hemos hecho una modificación para ser muy ortodoxos o exquisitos, pero sugiero que tratemos de no proponer modificaciones que no conduzcan realmente a mejorar la norma en lo que hace a su funcionamiento, a su eficacia, porque los diputados han introducido muchas modificaciones que son innecesarias y superficiales; no le agregan nada a la ley, como ocurre más adelante, cuando se habla del cumplimiento de las obligaciones y se hace la aclaración de que el incumplimiento será cuando se trate de obligaciones líquidas, exigibles, como si hubiera incumplimiento de obligaciones que no sean exigibles. O sea que hubo un intento o un propósito de modificar inclusive aquello cuya modificación no tenía ninguna razón de ser.

Entonces, para que no hagamos un sancionado, sugiero que tratemos de respetar al máximo nuestra sanción, porque así evitaremos algún tipo de dispersión en la futura interpretación de la ley.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º.

–La votación resulta afirmativa.



**Sr. Presidente** (Genoud). — El artículo ha sido aprobado por mayoría de dos tercios de los votos.

—Se enuncian y aprueban los artículos 10 a 12.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Los artículos 10 a 12 han sido aprobados por mayoría de dos tercios.

**Sr. Arnold.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

**Sr. Arnold.** — Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo respecto del artículo 12.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Se deja constancia del voto negativo del senador Arnold respecto del artículo 12.

—Se enuncia y aprueba el artículo 13.

**Sr. Presidente** (Genoud). — El artículo ha sido aprobado por mayoría de dos tercios.

—Se enuncia el artículo 14.

**Sr. Molinari Romero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: sin el ánimo del sancionado, término muy común —se ve— en la provincia originaria del senador...

**Sr. Menem.** — Puede decir La Rioja y no tiene necesidad de ponerse de pie. (*Risas.*)

**Sr. Molinari Romero.** — Lo que acá solicitamos —justamente para sancionar una ley que sea motivo de orgullo—, es la insistencia en la redacción original del Senado y la aceptación del apartado 4, propuesto por Diputados, que contempla una hipótesis que no había sido prevista por la Cámara de Senadores —cuya lectura por Secretaría solicito, para que se entienda— y que tiene que ver con el derecho de acceso y sobre todo con el ejercicio que corresponde a los sucesores en el caso de que los titulares hubieran fallecido.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Antes de la lectura por Secretaría, tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: creo importante aclarar lo que propone el bloque de la Unión Cívica Radical como agregado a este inciso. En principio no se protege la privacidad del caudillo. Se tiene más interés en lo que hace a las

cuestiones de datos de personas desaparecidas. Me parece que ése es el sentido que se le quiere dar; no en cuanto a que tengan acceso a ello los sucesores universales. Creo que a eso se apunta y hay que decirlo con todas las letras.

Entiendo que ése es el significado del agregado del apartado 4 a la sanción original de la Cámara de Senadores.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Que se lea por Secretaría, como se ha solicitado.

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). — (*Lee*) Punto 4º del artículo 14: "El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales".

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Molinari Romero.** — No sé si he comprendido bien al senador Branda —por eso hice algún gesto de no haberlo comprendido—. Supongo que cuando habló de desaparecidos lo hizo en los términos de aquellas personas que no viven más. Porque el concepto de fallecido involucra todas las situaciones, incluso lamentablemente aquellas de la historia argentina respecto de las cuales se ha adoptado la denominación de "desaparecidos". Pero lo que estamos planteando es el concepto de sucesor de cualquier persona que haya fallecido. ¿está claro?

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Menem.** — ¿Puedo hacer uso de la palabra, señor presidente?

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Yoma y, luego, el senador Menem.

**Sr. Yoma.** — Concedo la interrupción, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: no es para oponerme. Simplemente, quiero señalar que el tema ya está previsto en el artículo 34, cuando dice que la acción de protección de los datos personales podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado. O sea, si están legitimados para accionar, desde luego que les corresponde



el derecho. De modo tal me parece que sería innecesario agregar ese inciso 4 porque ya está previsto en el artículo 34.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: demoré en hacer uso de la palabra porque estaba buscando precisamente el artículo que mencionó el senador Menem. Ahora observo que el dictamen que tengo en mi poder pasa del artículo 33 al 38, y no se encuentra la hoja correspondiente al artículo 34. Por eso no lo encontraba. De todos modos, coincido con el señor senador Menem. El proyecto de ley prevé este agregado en el artículo 34. De cualquier manera, no hay problema en aceptarlo.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** – Solamente, es para aclarar un concepto.

El artículo 14, que estamos tratando, tiene que ver con el derecho de acceso del titular frente a quien posea un banco de datos o una información a la cual se pretende acceder. Lo que está planteando el señor senador Menem sobre el artículo 34 tiene que ver con una legitimación procesal activa; es decir, cuando le han denegado algún derecho. Entonces, a mi modo de ver, son dos situaciones distintas. En el artículo 14 se está hablando de un derecho normalmente ejercido sin situación de controversia, mientras que en el artículo 34 hay una situación de controversia.

**Sr. Yoma.** – Lo aceptamos.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Creo que si está legitimado para accionar, con mucha mayor razón le comprende el derecho en este caso; no obstante, vamos a aceptar la modificación. Creo que en derecho no ocurre lo mismo que en la vida diaria: a veces, lo que abunda, daña. Pero en este caso creo que no tiene ese carácter.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Se va a votar el artículo 14, con el agregado propuesto.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Ha sido aprobado por los dos tercios de los votos.

Se continúa con la votación en particular.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Resultan aprobados por los dos tercios de los votos.

Se deja constancia del voto negativo de los señores senadores Villarroel y Arnold en el artículo 16.

Informo que el cuerpo está sesionando con quórum estricto de 37 señores senadores.

Se continúa con la votación en particular.

–Se enuncian y aprueban los artículos 17 y 18.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Quedan aprobados por los dos tercios de los votos

–Se enuncia el artículo 19.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** – El artículo 19 se encuentra dentro del Capítulo III, titulado “Derecho de los titulares de datos”. La Cámara de Diputados ha realizado un pequeño agregado. En efecto, la sanción del Senado decía lo siguiente: “Artículo 19. (Gratuidad) La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado”.

Y Diputados agrega la expresión “que obren en registros públicos o privados”.

Considero acertada la modificación, ya que allana eventuales interpretaciones respecto de los tipos de archivo a los que se aplica la gratuidad.

En consecuencia, propongo que se acepte la modificación en el sentido de la gratuidad para actualizar o suprimir datos inexactos, ya sea respecto de los archivos públicos o privados.

Que quede en claro entonces la voluntad del legislador, respecto de que sea para ambos casos.

Por lo tanto, propongo que se acepte la modificación introducida por Diputados al artículo 19.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea el artículo 19 con la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente** (Genoud). – No corresponde que se lea el artículo, salvo que lo pidan.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Señor presidente: como autor del proyecto quiero aclarar que ésa es la interpretación.



No cabe duda de que se refiere tanto a lo público como a lo privado. Además, hace a la naturaleza del derecho del ciudadano el que se rectifique un dato sin ningún costo.

Incluso está el principio de que donde la ley no distingue, no debemos distinguir.

De todos modos, si esto tranquiliza a algunos espíritus, se lo puede dejar.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Por Secretaría se leerá el artículo tal como vino de Diputados.

—Se lee nuevamente el artículo 19.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 de la sanción de Diputados.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Por dos tercios, queda aprobado el artículo 19.

—Se enuncia y aprueba el artículo 20.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Por dos tercios, queda aprobado el artículo 20.

—Se enuncia el artículo 21.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: el artículo 21 en su apartado 2 establece los requisitos que deben reunir los registros de archivos de datos, como son las características y finalidad del archivo, la naturaleza de los datos, la forma y recolección de los mismos, los medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, etcétera.

Diputados agrega en el apartado 3 de este artículo: "El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en el capítulo VI de la presente ley".

Considero que dicha modificación agrega a la norma una especie de imposición de sanción, lo cual me parece acertado.

Ello no obstaría, por otra parte, para que la autoridad de aplicación imponga las sanciones previstas en el capítulo VI, ya que el artículo 29, sobre órganos de control, establece entre sus atribuciones la de "imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia".

Por lo tanto, voy a pedir al presidente de la comisión que acepte el agregado que hace Di-

**Sr. Yoma.** — Lo aceptamos.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Se va a votar el artículo 21 respondiendo al texto de Diputados, tal como lo solicitara el señor senador Branda.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: se va a votar el artículo 21 del Senado con el agregado propuesto por Diputados, tal como sucedió con el artículo 1º.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 21.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Por los dos tercios, queda aprobado el artículo 21.

—Se enuncian y aprueban los artículos 22 al 24.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Por los dos tercios, quedan aprobados los artículos 22 al 24.

—Se enuncia el artículo 25.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: es para aceptar una modificación hecha por la Cámara de Diputados. Creo que es atinada. Dicha Cámara modificó el plazo para conservar los datos una vez cancelada la deuda o cumplido el contrato, de los cinco años previstos originariamente en el Senado a dos. Creo que esto es acertado y va a proteger al deudor cuando estén canceladas las obligaciones. Así que pido que se vote aceptándose esta modificación.

**Sr. Presidente** (Genoud). — ¿El presidente de la comisión tiene algo que acotar?

**Sr. Yoma.** — En primer lugar, quiero ver si la numeración que tengo es correcta. Es el artículo 25 *in fine*, ¿no?

**Sr. Presidente** (Genoud). — Sí.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: también vale la pena aclarar aquí el espíritu o la voluntad del legislador que vamos a establecer en el artículo 47. Es decir, no solamente los dos años corren a partir de la cancelación de la obligación, sino desde la regularización de la misma.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en esa dirección el artículo 25.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Aprobado por los dos tercios.



—Se enuncia y aprueba el artículo 26.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Aprobado por los dos tercios.

—Se enuncia el artículo 27.

**Sr. Del Piero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires.

**Sr. Del Piero.** — Señor presidente: me quiero permitir insistir en que mantengamos la sanción de la Cámara de Diputados en este artículo, referido a los archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad.

En este caso, la Cámara de Diputados agregó la posibilidad de ceder a terceros la información emergente de un banco de datos en forma total o parcial cuando se cuente con el consentimiento expreso y previo del titular de los datos, lo cual definiendo en dos sentidos.

En primer lugar, porque creo que desde el punto de vista del titular de los datos no podemos restringir su posibilidad de una aceptación genérica para que sus propios datos sean transmitidos a terceros a fin de recibir información publicitaria.

Y desde el punto de vista del comercio electrónico, que es una actividad en expansión muy importante y que tiene un futuro promisorio, creo que esta inclusión abarataría sensiblemente su expansión.

Por lo tanto, me permito insistir en que aprobemos la sanción de la Cámara de Diputados y solicito a los señores senadores que la voten favorablemente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

**Sr. Arnold.** — Señor presidente: si bien se ha votado, quiero que conste mi voto negativo con relación al artículo 26.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Constará.

Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

**Sr. Carbonell.** — Señor presidente: quiero manifestar que coincido con la propuesta formulada por el señor senador Del Piero y que comparto su criterio apuntado con relación a la

ción genérica para que los datos puedan ser usados con fines publicitarios.

Por lo tanto, dejo constancia de mi voto en ese sentido y de que no comparto el dictamen de la comisión en este punto.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

**Sr. Del Piero.** — Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo para el caso de que se insista en la sanción de la Cámara de Senadores y reiterar que creo que la ley no puede ir más allá del derecho de libre disponibilidad del titular sobre sus propios datos.

Es decir, si nosotros no aceptáramos esta inclusión para que se puedan ceder los datos, estaríamos frente a la necesidad de que cada vez que se van a ceder datos a terceros haya que pedir expresamente la autorización a su titular, aunque éste quiera que genéricamente se disponga de sus datos libremente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley realmente complejo y en un procedimiento de insistencia de esta Cámara, aceptando diversas modificaciones.

Por lo que para que quede perfectamente claro cómo quedó el artículo 26, que ya se ha votado, voy a pedir que por Secretaría se dé lectura al texto.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). — (Lee) Artículo 26. Apartado 4º. "Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho".

**Sr. Molinari Romero.** — Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Se va a votar el artículo tal como fue leído por Secretaría...

**Varios señores senadores.** — Ya se votó ese artículo.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Perdón. Así es. Se va a votar el artículo 27.

—La votación resulta afirmativa.



**Sr. Presidente** (Genoud). – Resulta aprobado por dos tercios de los votos el texto de la sanción del Senado.

–Se enuncia el artículo 28.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** – Señor presidente: hay una incorporación que hizo la Cámara de Diputados que completa el excelente trabajo que hizo el Senado oportunamente en relación con las mediciones y estadísticas relevadas conforme la ley 17.622.

Solicito concretamente que se acepte el agregado.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** – Señor presidente: lo que se estaría aceptando es una excepción a la ley 17.622.

Voy a apoyar la modificación sugerida.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: aunque no tiene la excelencia de la sanción del Senado, lo vamos a aceptar. *(Risas.)*

**Sr. Presidente** (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 28 con la modificación propuesta por el señor senador Molinari Romero.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Resulta aprobado por dos tercios de los votos.

–Se enuncia el artículo 29.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** – Señor presidente: este artículo trata de los órganos de control, y hay una incorporación a la sanción del Senado realizada oportunamente por la Cámara de Diputados, cuya aceptación voy a solicitar.

Concretamente, me refiero a la modificación realizada al apartado 3. segundo y tercer párrafos.

Si me permiten, la leeré directamente para evitar confusiones. La redacción del Senado dice: “El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y podrá ser removido por el

Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones”. Pero el agregado sería: “... funciones, incapacidad sobreviniente o condena por delito doloso” y continúa agregando: “El Director, así como también el resto del personal, están obligados a guardar secreto de los datos de carácter personal que conozcan en el desarrollo de su función”.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Señor presidente: pediría al señor senador por Córdoba que obviara la modificación que acaba de proponer.

En esto de la insistencia o de la aceptación hemos hecho una aplicación extensiva relacionada con el tema del veto parcial, en el sentido de que se puede aceptar o insistir parcialmente en cuanto haya una autonomía normativa de las normas.

En este caso, estamos haciendo una mezcla; estamos modificando e intercalando expresiones. Creo que éste no es el espíritu de la ley. Creo sinceramente que podemos caer en una causa de nulidad. Me parece que en este caso no estamos respetando la normativa constitucional. Una cosa es que se acepten párrafos separados, otra que se modifique un plazo y otra que se mezclen de esta forma las sanciones de una y otra Cámara. Pienso que estamos haciendo una mala interpretación de la cláusula constitucional, que la estamos haciendo extensiva por el tema del veto.

Por eso pediría que dejemos el artículo como está, evitando de esa manera eventuales nulidades.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** – Señor presidente: iba a solicitar la opinión del presidente de la comisión ante esta observación importante que hace el senador Menem.

Lo que sucede es que está previendo situaciones realmente complicadas. Es valioso el agregado que estamos planteando, de que el director, como el resto del personal, están obligados a guardar secreto de lo que conozcan en razón de sus funciones. No es un agregado que pudiéramos perder de vista.

Comprendo la observación que hace el senador Menem. Pero le pediría al presidente de la comisión que diga cuál es la interpretación que le da.



**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: de todos modos, al prever la sanción del Senado el mal desempeño en las funciones, se puede considerar que abarca los otros dos supuestos: la condena por delitos dolosos, obviamente, y la incapacidad sobreviniente.

Lo que podríamos hacer para salvar la previsión que atinadamente plantea el senador Menem es tomar el párrafo final, que sí tiene autonomía normativa —el relativo al director y al resto del personal— y obviar lo de incapacidad sobreviniente o condena por delito doloso. O sea, no aceptaríamos esa modificación de la Cámara de Diputados porque ya estaría contemplada dentro del “mal desempeño de sus funciones”, y tomar el último párrafo, que sí tiene autonomía normativa, y dice: “El director así como también el resto del personal están obligados guardar secreto de los datos de carácter personal que conozcan en el desarrollo de sus funciones”.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: me parece que deberíamos tener mucho cuidado en hacer este tipo de inserciones porque vamos a sentar un mal precedente para casos futuros. Considero que deberíamos mantener el criterio. Creo que se está cambiando el espíritu de la normativa, sobre la cual lo único que podemos hacer es aceptar o insistir.

No es un prejuicio constitucional. En estos casos estamos transitando por un terreno que ha sido muy discutido. Incluso algunos rechazan la posibilidad de que parcialmente se pueda hacer este tipo de aceptaciones o insistencias.

No le niego importancia al tema, pero en todo caso creo que debemos tomar conciencia de que estamos limitados en esta segunda revisión a aceptar o rechazar la sanción de la Cámara de Diputados. Por eso le pediría que dejemos de lado esta modificación para salvar la posibilidad de que en el día de mañana se pueda utilizar como precedente para otros casos.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Señor presidente: solamente para contribuir a que podamos sancionar esta ley, y que sea la mejor que podamos tener hoy, retiro la propuesta en atención a lo

**Sr. Menem.** — Gracias.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: más allá del retiro de la propuesta del senador Molinari Romero, que es elogiable, quiero decir que disiento cordialmente con mi colega de bancada y de provincia. Si aplicamos el criterio que plantea el senador con este artículo son cuestionables la mayoría de las modificaciones que aceptamos de Diputados, empezando por el artículo 1°. Además, hay un acta firmada por los presidentes de ambas Cámaras, donde se establece taxativamente que la insistencia puede ser por la totalidad de la norma o por período legislativo. Esto fue firmado por los presidentes de ambas Cámaras en 1995. Por eso no creo que sea cuestionable la legalidad o el carácter reglamentario de las modificaciones que estamos aceptando.

De todos modos, para no alargar más la discusión, si el senador Molinari Romero la quiere retirar, lo aceptamos. Pero, reitero, no creo que lo planteado por el senador Menem sea aplicable en todo su contexto, porque esto invalidaría la mayor parte de los artículos que estamos tratando.

**Sr. Presidente** (Genoud). — No tiene objeto continuar con la discusión si se acaba de retirar la moción.

Tiene la palabra el senador Menem.

**Sr. Menem.** — Simplemente, la modificación que se quiere hacer no constituye técnicamente un período. Por eso no corresponde. El artículo 1° en la última parte sí constituye un período. Pero, de todos modos, yo diría que esta discusión tendríamos que saldarla en una reunión, convocada a tal efecto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para sentar precedente con el fin de que en casos futuros hagamos una interpretación adecuada y para que no tengamos este tipo de diferencias durante el debate de una ley.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Entonces, vamos a someter a votación...

**Sr. Yoma.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** — Es importante dejar en claro que de ninguna manera comparto el hecho de que esto no se considera período. Si aceptamos este criterio, abrimos la puerta para que se persiga



la nulidad de cláusulas que se han votado en este sentido. Pero nos comprometemos a tratar el tema.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Se va a votar el artículo 29 de acuerdo con la sanción original, del Senado.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Queda aprobado por los dos tercios.

–Se enuncian y aprueban los artículos 30 a 32.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Por los dos tercios, quedan aprobados.

Tiene la palabra el senador Arnold.

**Sr. Arnold.** – Que conste mi voto negativo.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Queda consignado su voto negativo.

Tiene la palabra el senador Branda.

**Sr. Branda.** – Señor presidente: quiero hacer constar mi voto negativo en el artículo 29, órganos de control.

Lo hago debido a lo que pedí, en su oportunidad, cuando voté en disidencia, porque yo modificaba totalmente este artículo. Y no coincidí con lo que propuse originariamente.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Se consigna el voto negativo respecto del artículo 29, aunque esos votos negativos tienen que hacerse en el momento de la votación. De lo contrario, si se aplica un criterio retroactivo, se pone en duda que la aprobación haya sido por los dos tercios o no. Pero, como la mayoría para ese artículo fue holgada, su voto negativo no modifica el resultado.

–Se enuncian y aprueban los artículos 33 a 40.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Por los dos tercios, quedan aprobados.

Tiene la palabra el senador Arnold.

**Sr. Arnold.** – Señor presidente, que conste mi voto negativo respecto del artículo 40.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Así se hará.

–Se enuncian y aprueban los artículos 41 y 42.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Por los dos tercios, quedan aprobados.

Tiene la palabra el senador Arnold.

**Sr. Arnold.** – Que conste mi voto negativo respecto del artículo 42.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Nos están sobrando votos, por eso no modifica el resultado.

Tiene la palabra el senador Menem.

**Sr. Menem.** – Para evitar nulidades, señor presidente, y para que no se pueda cuestionar, cuando el senador dice con posterioridad a la votación “que conste mi voto negativo”, no corresponde que se diga “por holgada mayoría”. Porque cuando usted contó, ese senador no había levantado la mano.

El día de mañana puede interpretarse que cómo sabe que ha sido holgada, cuántos votos han sido.

No. Cuando usted somete a votación un artículo, los senadores hacen la aclaración a posteriori pero en ese momento no levantaron la mano y usted contó bien que eran los dos tercios.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Exactamente; vale. De todos modos, estoy permanentemente observando el número de los presentes, el número de personas que levantan la mano y cada vez que digo “dos tercios” es, prácticamente, unanimidad, salvo los votos de los senadores Rodríguez Saá y Varizat, y algunos otros votos negativos que se han consignado puntualmente.

–Se enuncian y aprueban los artículos 43 a 46.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Quedan aprobados por los dos tercios.

**Sr. Arnold.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el senador Arnold.

**Sr. Arnold.** – En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto negativo en el artículo 46.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Entonces, hay tres votos negativos en el artículo 46. Queda aprobado por los dos tercios.

–Se enuncia el artículo 47.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: me referí a este artículo en ocasión de la exposición en general; fue incluido en la votación en particular cuando esta norma fue sancionada; no figuraba ni en el dictamen de la comisión ni en el proyecto original. La Cámara decidió incluirlo y, al no haber sido producto del análisis de comisión, quizá no hemos utilizado la terminología correcta que mejor se ajustase al espíritu del legislador.



Concretamente, dice: "Los bancos de datos prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir, o en su caso, omitir, asentar, todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley".

**Sr. Branda.** -- Es un blanqueo.

**Sr. Yoma.** -- Quiero expresar cuál es la voluntad del legislador al sancionar esta norma. La palabra "cancelada" es abarcativa de una situación de regularización de una obligación comercial, no solamente de su extinción sino que incluye también a aquella persona que ha regularizado una obligación en mora, que tiene el mismo derecho que aquel que hubiese extinguido la obligación de que se supriman o se omitan asentar los datos referidos al incumplimiento o a la mora en la obligación.

Si la Cámara está de acuerdo con esta interpretación, como lo dije al comienzo, voy a solicitar que, con posterioridad a la votación de este proyecto de ley se apruebe un proyecto de comunicación --que creo que ya obra en Secretaría-- dirigido al Poder Ejecutivo para que la futura reglamentación recoja esta interpretación de la voluntad del legislador que acabo de exponer, que será acompañado con la versión taquigráfica del debate o, por lo menos, del relacionado con este artículo.

De más está decir que este artículo --utilizando las palabras del senador Alasino-- sí constituye el meollo o el núcleo más reclamado por amplios sectores de la sociedad en lo que hace a las distintas coyunturas recesivas y crisis recurrentes que ha sufrido nuestro país, desde "la quila" en 1995 en adelante. Como consecuencia de ellas, han quedado millones de argentinos inhabilitados por cuentas cerradas, por retrasos en sus obligaciones comerciales o por cualesquiera otras circunstancias han quedado virtualmente inhabilitados para el acceso al crédito o para el giro normal de sus negocios, debiendo utilizar muchas veces nombres sustitutos de empleados o de personas allegadas para operar en cuenta corriente --por ejemplo.

Por eso, cuando se debatió en comisión este tema, convocamos a las asociaciones de usuarios y consumidores y a representantes de pequeñas y medianas empresas de todo el país, quienes han reclamado, yo diría apasionadamente, la sanción de este artículo. Reitero que implica incorporar al circuito productivo, al circui-

to comercial, a millones de argentinos hoy sancionados por el abuso que hacen las empresas encargadas de informes crediticios que, prácticamente, condenan a una inhabilitación permanente por el solo hecho de que en algún momento un ciudadano se atrasó en el pago de una obligación.

Estas organizaciones han llegado, inclusive, hasta el abuso de tener empleados en las mesas de entrada de los tribunales de comercio donde el solo ingreso de una demanda comercial ya implica el aviso a dichas organizaciones; es decir que se incluye al comerciante o empleado por el solo hecho de que ha ingresado una demanda en su contra por incumplimiento de una obligación, sin siquiera esperar el resultado del juicio.

Entonces es tal el abuso de estas organizaciones de informes crediticios que esta ley viene a poner justicia, a restringir y a poner coto a este indiscriminado manejo de datos personales que han hecho estas organizaciones las que, reitero, son virtuales sanciones penales que recaen sobre millones de argentinos, pequeños y medianos comerciantes o empleados.

Lo importante es que quede claro que si al momento de la sanción de la ley una persona que estuvo en mora ha regularizado su situación comercial, tiene derecho a que se suprima o se omita asentar sus datos en los registros de morosos. Ese es el sentido del término cancelación. Obviamente para aquel que haya cancelado su obligación es exactamente lo mismo. Por lo cual voy a pedir que se vote inmediatamente y sobre tablas el proyecto que está en Secretaría.

**Sr. Presidente (Menéndez).** -- Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** -- Señor presidente: como bien aclaró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, este artículo no estaba en el proyecto original, sino que fue incorporado en el debate en el curso de la primera sanción del proyecto de ley.

Quiero decir que realmente el artículo que debió haber sido utilizado, el lugar de "cancelada" es "extinguida", porque la forma de dar por terminada una obligación en el Derecho Civil se llama extinción de las obligaciones. Por eso, cuando se habla de cancelar muchas veces la gente cree que automáticamente es el pago, pero hay otras formas de terminar con las obligaciones, como la novación, la compensación,



la remisión de la deuda; es decir que hay otros medios de extinción de las obligaciones. Que quede claro que el pensamiento del autor de la norma cuando habla de cancelación, se está refiriendo a todos los modos de extinción de las obligaciones; es decir pago, novación, compensación, remisión de la deuda y todas las otras formas contempladas en el Código Civil.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Sí, con el agregado de que no solamente es extinción lo que queremos interpretar con la palabra cancelación; es la extinción en los términos planteados por el senador Menem; con la aclaración de que, además, la regularización de una obligación comercial coloca a la persona con los mismos derechos de aquel que ha extinguido la obligación por las distintas vías ya señaladas. Este es el sentido de la voluntad del legislador.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** – Señor presidente: lo que se refiere al tema cancelación es a sus efectos. Por eso se pide que se vote de esta forma; es decir que ante la cancelación de la obligación, también se puede producir la depuración de los archivos existentes. Esta es la intención que tuvo esta modificación que se hizo en el recinto; es cierto lo que dice el senador, porque no estaba en el dictamen. Se trata de una incorporación que se hizo en el recinto y, como miembro informante, yo la acepté en aquella oportunidad la primera vez que se votó. Se quiere tener el efecto de la cancelación y no hacer una distinción de cómo se extinguen las obligaciones. Me parece que éste es el sentido que le quiso dar el senador Yoma cuando pidió que se introdujera esto.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 47.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Queda aprobado por los dos tercios.

–El artículo 48 es de forma.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup> Se harán las comunicaciones correspondientes.

Corresponde a continuación someter a votación las inserciones solicitadas.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Quedan aprobadas.<sup>1</sup>

**Sr. Menem.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Señor presidente: no sé si han tomado nota de que hay una fe de erratas de la Cámara de Diputados sobre la sanción que se había enviado. Lo digo para que quede constancia y se tome nota.

**Sr. Presidente** (Genoud). – La fe de erratas está en Secretaría.

## 6

### REGLAMENTACION DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

**Sr. Presidente** (Genoud). – Antes de avanzar en el tratamiento de otros temas, la Presidencia entiende que correspondería tratar sobre tablas el proyecto de comunicación que anunciara el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales vinculado con la interpretación de la norma que se acaba de votar. (S. 2188/2000.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). – (Lee)

*El Senado de la Nación*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, al dictar el decreto reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales, sancionada en el día de la fecha, considere la interpretación auténtica realizada por el legislador sobre los alcances del artículo 47 de dicha norma, a cuyo efecto se adjunta la correspondiente versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Senadores.

*Jorge R. Yoma. – Marcelo J. Romero.*

**Sr. Presidente** (Genoud). – En consideración el tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Señor presidente: yo creí que el artículo que habla de la reglamentación era el 41, pero se ve que es otro. Este proyecto de comunicación es emblemático de lo que estamos sancionando.

<sup>1</sup> Ver el apéndice.



Pediría que se insista con el llamado, salvo que se haya cumplido el tiempo fijado oportunamente.

**Sr. Presidente (Genoud).** — Se han cumplido los cinco minutos de llamado.

Por ende, la Presidencia levanta la sesión con la constancia de que hay 26 señores senadores. De tal modo que la imposibilidad de continuar

con la sesión, ya sea para tratar el Código de Procedimientos o para escuchar al señor jefe de Gabinete de Ministros, está dada por la cantidad de senadores presentes.

La sesión está levantada.

—Son las 22 y 37.

MARIO A. BALLESTER.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

## 12

### APENDICE

#### I

### SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

#### Protección de datos personales

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el siguiente:

#### *El Senado de la Nación*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales sancionada en el día de la fecha, considere la interpretación auténtica realizada por el legislador sobre los alcances del artículo 47 de dicha norma, a cuyo efecto se adjunta la correspondiente versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Senadores.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil.

2

#### Reglamentación de la ley de protección de datos personales

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 6054.

3

#### Homenaje a representantes de Gendarmería Nacional

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 6055.

4

#### Homenaje a los caídos en el intento de copamiento del Regimiento N° 29 de Monte, Formosa

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 6056.

5

#### Eliminación del impuesto a los combustibles líquidos en la Patagonia

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 6057.

6

#### Derogación del decreto 66/75

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 6058.

#### II

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ARNOLD

#### HABEAS DATA

Venido en revisión de Diputados.

Artículo 2º: en la definición de archivo, registro o banco de datos, falta la incorporación de datos sensibles.

Idem para la definición de "datos informatizados".

La definición de "usuario de datos" debería ser cambiada por la de "operador, tratante".

Usuario se confunde con el que hace uso o accede a la red de información.

Artículo 9º, inciso 1: cambiar "usuario" por "operador".

Agregar datos sensibles.

Artículo 10: agregar datos sensibles.

Artículo 12, inciso 1: reemplazar "Es prohibida" por "Queda prohibido".

La transferencia internacional que fluye debe tener dos aspectos además de la protección:

El mecanismo de reclamo eficiente y gratuito, de modo de poder garantizar los derechos de los titu-



res. La CEE tiene una norma desde el 99 en ese sentido.

Primero se habilita la vía del reclamo extrajudicial inmediato, gratuito. Además, si existe atropello a los derechos, se hace el reclamo formal judicial.

Otro aspecto que no se toma en cuenta es la ley aplicable en materia internacional, ya que la norma aplica un criterio.

Artículo 15, inciso 3: la palabra "podrá" deberá ser reemplazada por "deberá".

Artículo 16, inciso 2: el plazo para la modificación de datos de 5 días hábiles es poco, ya que a veces las bases de datos públicas tienen enorme volumen de información. Caso BCRA y otros.

Debería hacerse la distinción entre las públicas y las privadas. Las privadas que lucran con la información pueden modificar las fuentes en ese lapso. Las públicas deben corroborar con sus propios registros o de donde los obtuvieron. Debería contener un mínimo de 60 días.

Otra cosa es que equipara jurídicamente el error con la falsedad, habilitando el resarcimiento del artículo 46.

La redacción podría ser:

El responsable u operador de un banco de datos debe proceder a la rectificación, suspensión, actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias para tal fin en el plazo de 5 días hábiles, tratándose de una entidad privada y de 60 hábiles tratándose de una entidad pública, contados desde la presentación del reclamo o advertencia del error.

En los incisos 4, 6 y 7 cambiar la palabra "usuario" por "operador".

Artículo 18: falta la Comisión del HSN.

Capítulo IV: reemplazar "usuarios" por "operadores".

Artículo 21, inciso 2, apartado i): agregar "suspensión".

Inciso 3: cambiar "usuario" por "operador".

Artículo 26, inciso 2: los apartados a) y b) resultan de cumplimiento imposible para los bancos de datos públicos, como el BCRA, que procesa información de terceros, que además incluye deudor al fisco, por lo tanto no está vencida ni es exigible mientras se cumplan con los recaudos. (Ver anexo.)

Otra vez, habría que hacer la salvedad para la información crediticia y comercial que integran datos personales. debe hacerse la distinción entre la deuda contraída y la vencida y exigible (morosos). El requerimiento de pago debe hacerlo el acreedor, no todos los operadores de la base de datos.

La redacción de los apartados podría ser la siguiente:

a) Existencia previa de la deuda;

b) Deuda vencida exigible y renegociada o parcialmente pendiente;

c) Existencia de deuda vencida y exigible e impaga. En este caso que el acreedor haya efectuado requerimiento de pago.

El inciso 3: cambiar "usuario" por "operador".

El inciso 4: la notificación a bancos de datos por parte de entidades crediticias en 48 horas es imposible de manejar por parte de los archivos públicos. Debería remitirse a los plazos propuestos en el artículo 16.

El inciso 5: ídem que anterior.

Artículo 29: debe incluir la garantía de competitividad comercial entre las bases o bancos de datos.

Artículo 30: "usuarios" por "operadores".

Artículo 31: "usuarios" por "operadores".

No distingue el error material de la culpa o dolo para la aplicación de sanciones administrativas de 1.000 pesos la mínima.

Artículo 32: no queda claro cómo interviene el organismo de control para probar el daño en la tipificación del delito.

En el apartado 2, agregar los datos sensibles.

Artículo 39: "usuarios" por "operadores".

Artículo 40: la litis en el domicilio del actor puede ser muy engorrosa para organismos públicos como el BCRA y otros.

Artículo 42 *in fine*: no parece sensato la habilitación de la vía administrativa y judicial directa, sin culpa o dolo, especialmente porque habilita al reclamo de \$ 5.000 por daño moral (artículo 46) además de sanción de \$ 1.000 administrativa.

Artículo 43: a petición de parte y no de oficio.

Artículo 46: el daño moral no se puede presumir, y menos cuantificar básicamente en \$ 5.000. Debería desaparecer. Altera los principios de derecho en materia de responsabilidad.